

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
Magistrado Sustanciador **EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI**  
San José de Cúcuta, Dieciséis (16) de Diciembre de dos mil Quince (2015)

Ref: Radicado : 54-001-33-31-704-2011-00009-01  
Medio de Control : Popular  
Actor : Defensoría del Pueblo  
Demandado : Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional –  
Municipio de San José de Cúcuta – Corporación  
Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –  
Corponor – Punto de Extremo – La Talanquera –  
Karaoke Safari Bar – Microparrilla Bar – Spardis  
Bar-Star Beer Star – Ritmo Latino

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 10 c. principal de segunda instancia), y por considerar innecesaria la celebración de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procederá a correr traslado por el término de diez (10) días, para que la partes presenten por escrito sus alegatos.


De igual manera, y atendiendo que el artículo 623 del Código General Proceso modificó la parte final de la norma antes citada, se dispondrá que vencido el término que tienen las partes para alegar, se surta traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.


**Por lo brevemente expuesto, se dispone:**

1.- De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 623 del Código General del Proceso, córrase traslado por el término de diez (10) días, para que las partes presenten por escrito sus alegatos de conclusión.

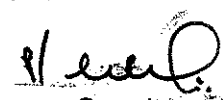
2.- Una vez vencido el término que tienen las partes para alegar, por Secretaría, súrtase traslado al Procurador 24 Judicial II para Asuntos Administrativos por el término de diez (10) días, sin retiro del expediente.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI**  
Magistrado

  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN

Por anotación en el expediente, se providenció el día 16 de Diciembre de 2015, hoy **18 DEC 2015**

  
Secretaría



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER  
Magistrada Ponente: Dra. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ  
San José de Cúcuta, 16 DIC 2015

Radicado : 54-001-33-33-003-2013-00333-02  
Demandante : Carlos Arturo Torrado Navarro  
Demandado : Nación – Ministerio de Educación –  
Municipio de San José de Cúcuta.  
Medio de Control : Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Sería del caso proceder a resolver los recursos de apelación interpuestos por la apoderada parte demandante y la Procuradora 98 Judicial Administrativa de Cúcuta en contra de la sentencia proferida el 24 de junio de 2015 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta; si no advirtiera el Despacho que el presente expediente debe ser suspendido de oficio, conforme con lo siguiente:

#### ANTECEDENTES

La demanda de la referencia fue instaurada por la señora Carlos Arturo Torrado Navarro en contra de Nación – Ministerio de Educación – Municipio de San José de Cúcuta, con el objeto que se declare la nulidad del oficio 504 del 04 de Junio de 2013, mediante el cual el Subsecretario Área de Talento Humano niega el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

#### Trámite en Primera Instancia

El trámite de la demanda correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, quien mediante auto del 24 de octubre de 2013 admitió la presente demanda, ordenando las notificaciones de Ley (fl. 180).

Surtidas las actuaciones procesales pertinentes, el A-quo, el día 24 de junio de 2015, profirió sentencia (fls 340 al 352). Dentro de la oportunidad legal, la

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-003-2013-00333-02  
Actor: Carlos Arturo Torrado Navarro

apoderada de la parte demandante y la Procuradora 98 Judicial Administrativa de Cúcuta impetraron recurso de apelación en contra de la referida sentencia.

### Trámite en Segunda Instancia

Los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia proferida en primera instancia fueron admitidos por este Tribunal, mediante auto del 07 de septiembre de 2015 (fl.416).

Con auto del 09 de octubre de 2015 (fl.422), y por considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procedió a correr traslado para que las partes presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

El día 19 de noviembre de 2015, pasa el expediente al Despacho para que se profiera sentencia de segunda instancia (fl. 491).

### CONSIDERACIONES

Al examinar en la página web del Consejo de Estado, el proveído del día 30 de julio de 2015 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, por el cual resolvió avocar el conocimiento del expediente radicado con el No. 15-001-33-33-010-2013-00134-01, demandante Nubia Yomar Plazas Gómez, demandado Nación – Ministerio de Educación – Departamento de Boyacá, con el objeto de proferir sentencia de unificación de jurisprudencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, precisó:

*“En el caso concreto, la solicitud del Tribunal Administrativo de Boyacá se sustenta principalmente en que el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha proferido sentencias encontradas sobre la materia.*

*En efecto, la Corporación, en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, en varias oportunidades ha señalado que las normas legales y reglamentarias que regulan lo relacionado con la administración del personal docente del país, no prevén el reconocimiento de la prima legal o de servicios, por lo que los educadores no tienen derecho a dicho beneficio, así se argumentó, por ejemplo en los fallos de 15 de junio<sup>1</sup> y 7 de diciembre<sup>2</sup> de 2011. Pero también ha dicho la Corporación, que los docentes sí son beneficiarios de la mencionada prima, pues, la Ley 91 de 1989 les hizo extensivo a los educadores el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel central, para quienes el ordenamiento jurídico sí les concede la prima reclamada, así se adujo en fallo de 22 de marzo de 2012<sup>3</sup>.*

<sup>1</sup> Emitido en el expediente 0550-07 con ponencia de la Consejera Ramírez de Páez.

<sup>2</sup> Proferido en el expediente 2200-07 con ponencia del Consejero Luis Rafael Vergara Quintero.

<sup>3</sup> Proferido en el expediente 2483-10 con ponencia del Consejero Gómez Aranguren.

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-003-2013-00333-02  
Actor: Carlos Arturo Torrado Navarro

**En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la posición al interior de la Sección Segunda de esta Corporación no ha sido uniforme, se hace necesario unificar la jurisprudencia sobre la materia, y en tal virtud, se avocará conocimiento del expediente de la referencia a fin de proferir sentencia de unificación jurisprudencial en el sub examine.**

La trascendencia de la discusión que se evidencia en el presente proceso exige al Juez de lo Contencioso Administrativo, en aras de lograr la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley y la preservación del orden jurídico, en los términos del artículo 103<sup>4</sup> de la Ley 1437 de 2011, y en clara consonancia con su rol de garante en el marco del proceso y conductor del mismo, vincular a personas jurídicas que, con criterios calificados, puedan aportar a la discusión que plantea la presente demanda diversos elementos de juicio para proferir una decisión. Lo anterior, también en ejercicio de los poderes de ordenación e instrucción que el artículo 43<sup>5</sup> de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, le confiere a los jueces.

Atendiendo expresamente lo sostenido en el aparte antes transcrito, se procederá a citar a diferentes sectores relacionados con el régimen salarial y prestacional de los docentes, en aras de enriquecer, se insiste, el debate propio de este trámite."

De lo anteriormente expuesto, el Despacho considera necesario la suspensión del proceso de oficio, hasta tanto el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa profiera una sentencia de unificación del presente tema, en aras de preservar los principios de economía procesal, seguridad y preservación del orden jurídico y efectividad de los derechos laborales, dado que en la actualidad, el caso similar al que en esta oportunidad es objeto de estudio, está siendo objeto de unificación en esa Corporación.

<sup>4</sup> **Artículo 103. Objeto y principios.** Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga.

Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.

<sup>5</sup> **Artículo 43. Poderes de ordenación e instrucción.** El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción:

1. Resolver los procesos en equidad si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza.
2. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta.
3. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten.
4. Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado.
5. Ratificar, por el medio más expedito posible, la autenticidad y veracidad de las excusas que presenten las partes o sus apoderados para justificar su inasistencia a audiencias o diligencias. En caso de encontrar inconsistencias o irregularidades, además de rechazar la excusa y aplicar las consecuencias legales que correspondan dentro del proceso o actuación, el juez compulsará copias para las investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar.
6. Los demás que se consagren en la ley.

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-003-2013-00333-02  
Actor: Carlos Arturo Torrado Navarro

Así las cosas, el Despacho decretará la suspensión del presente proceso de oficio, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado profiera una sentencia que unifique criterios sobre la prima de servicios de docentes.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

### RESUELVE

**PRIMERO:** Decrétese de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado, profiera sentencia de unificación de criterios, sobre la prima de servicios docentes, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

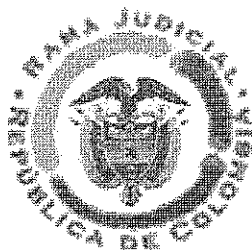
  
MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ  
Magistrada



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA REGISTRAL

Por anotación en ESTADO, notifico a las  
partes la providencia anterior, a las 9:00 a.m.  
hoy 11 0 DEC 2015

  
Secretario General



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
**Magistrada Ponente: Dra. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
**San José de Cúcuta, 16 DIC 2015**

Radicado : 54-001-33-33-002-2013-00346-01  
Medio de Control : **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**  
Demandante : Gloria Esperanza Duarte García  
Demandado : Nación – Ministerio de Educación –  
Municipio de San José de Cúcuta

Sería del caso proceder a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 06 de julio de 2015 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta; si no advirtiera el Despacho que el presente expediente debe ser suspendido de oficio, conforme con lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

La demanda de la referencia fue instaurada por la señora Gloria Esperanza Duarte García en contra de Nación – Ministerio de Educación –Municipio de San José de Cúcuta, con el objeto que se declare la nulidad del oficio 504 del 04 de junio de 2013, mediante el cual el Subsecretario de Despacho Área de Talento Humano, niega el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

**Trámite en Primera Instancia**

El trámite de la demanda correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta, quien mediante providencia del 30 de septiembre del 2013, admitió la demanda, ordenando las notificaciones de Ley (fl. 96).

Surtidas las actuaciones procesales pertinentes, el A-quo, el día 06 de julio de 2015, profirió sentencia (fls 182 a 184). Dentro de la oportunidad legal, la

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00346-01  
Actor: Gloria Esperanza Duarte García

apoderada de la parte demandante, impetró recurso de apelación en contra de la referida sentencia.

### Trámite en Segunda Instancia

El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida en primera instancia fue admitido por este Tribunal, mediante auto del 16 de septiembre de 2015 (fl. 248).

Con auto del 09 de octubre de 2015 (fl. 256), y por considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procedió a correr traslado para que las partes presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

El día 17 de noviembre de 2015, pasa el expediente al Despacho para que se profiera sentencia de segunda instancia (fl.325).

### CONSIDERACIONES

Al examinar en la página web del Consejo de Estado, el proveído del día 30 de julio de 2015 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, por el cual resolvió avocar el conocimiento del expediente radicado con el No. 15-001-33-33-010-2013-00134-01, demandante Nubia Yomar Plazas Gómez, demandado Nación – Ministerio de Educación – Departamento de Boyacá, con el objeto de proferir sentencia de unificación de jurisprudencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, precisó:

*"En el caso concreto, la solicitud del Tribunal Administrativo de Boyacá se sustenta principalmente en que el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha proferido sentencias encontradas sobre la materia.*

***En efecto, la Corporación, en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, en varias oportunidades ha señalado que las normas legales y reglamentarias que regulan lo relacionado con la administración del personal docente del país, no prevén el reconocimiento de la prima legal o de servicios, por lo que los educadores no tienen derecho a dicho beneficio, así se argumentó, por ejemplo en los fallos de 15 de junio<sup>1</sup> y 7 de diciembre<sup>2</sup> de 2011. Pero también ha dicho la Corporación, que los docentes sí son beneficiarios de la mencionada prima, pues, la Ley 91 de 1989 les hizo extensivo a los educadores el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel central, para quienes el ordenamiento jurídico sí les concede la prima reclamada, así se adujo en fallo de 22 de marzo de 2012<sup>3</sup>.***

<sup>1</sup> Emitido en el expediente 0550-07 con ponencia de la Consejera Ramírez de Páez.

<sup>2</sup> Proferido en el expediente 2200-07 con ponencia del Consejero Luis Rafael Vergara Quintero.

<sup>3</sup> Proferido en el expediente 2483-10 con ponencia del Consejero Gómez Aranguren.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la posición al interior de la Sección Segunda de esta Corporación no ha sido uniforme, se hace necesario unificar la jurisprudencia sobre la materia, y en tal virtud, se avocará conocimiento del expediente de la referencia a fin de proferir sentencia de unificación jurisprudencial en el sub examine.

La trascendencia de la discusión que se evidencia en el presente proceso exige al Juez de lo Contencioso Administrativo, en aras de lograr la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley y la preservación del orden jurídico, en los términos del artículo 103<sup>4</sup> de la Ley 1437 de 2011, y en clara consonancia con su rol de garante en el marco del proceso y conductor del mismo, vincular a personas jurídicas que, con criterios calificados, puedan aportar a la discusión que plantea la presente demanda diversos elementos de juicio para proferir una decisión. Lo anterior, también en ejercicio de los poderes de ordenación e instrucción que el artículo 43<sup>5</sup> de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, le confiere a los jueces.

Atendiendo expresamente lo sostenido en el aparte antes transcrito, se procederá a citar a diferentes sectores relacionados con el régimen salarial y prestacional de los docentes, en aras de enriquecer, se insiste, el debate propio de este trámite."

De lo anteriormente expuesto, el Despacho considera necesario la suspensión del proceso hasta tanto el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa profiera una sentencia de unificación del presente tema, en aras de preservar los principios de economía procesal, seguridad y preservación del orden jurídico y efectividad de los derechos laborales, dado que en la actualidad, el caso similar al que en esta oportunidad es objeto de estudio, está siendo objeto de unificación en esa Corporación.

<sup>4</sup> **Artículo 103. Objeto y principios.** Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga.

Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.

<sup>5</sup> **Artículo 43. Poderes de ordenación e instrucción.** El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción:

1. Resolver los procesos en equidad si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza.
2. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta.
3. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten.
4. Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado.
5. Ratificar, por el medio más expedito posible, la autenticidad y veracidad de las excusas que presenten las partes o sus apoderados o terceros para justificar su inasistencia a audiencias o diligencias. En caso de encontrar inconsistencias o irregularidades, además de rechazar la excusa y aplicar las consecuencias legales que correspondan dentro del proceso o actuación, el juez compulsará copias para las investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar.
6. Los demás que se consagren en la ley.



Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00346-01  
Actor: Gloria Esperanza Duarte García

Así las cosas, el Despacho decretará de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado profiera una sentencia que unifique criterios sobre la prima de servicios de docentes.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

### RESUELVE

**PRIMERO:** Decrétese de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado, profiera sentencia de unificación de criterios, sobre la prima de servicios docentes, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ  
Magistrada



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONFERENCIA SECRETARIAL

Por anotación en ESTADO, notifico a las  
partes la providencia anterior, a las 3:00 a.m.  
hoy 18 DEC 2015

  
Secretario General



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
**Magistrada Ponente: Dra. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
**San José de Cúcuta, 16 DIC 2015**

Radicado : 54-001-33-33-003-2013-000384-02  
Medio de Control : **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**  
Demandante : Eddy Stella Manrique Puerto  
Demandado : Nación – Ministerio de Educación –  
Municipio de San José de Cúcuta

Sería del caso proceder a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 30 de junio de 2015 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del circuito de Cúcuta; si no advirtiera el Despacho que el presente expediente debe ser suspendido de oficio, conforme con lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

La demanda de la referencia fue instaurada por la señora Eddy Stella Manrique Puerto en contra de Nación – Ministerio de Educación – Municipio de San José de Cúcuta, con el objeto que se declare la nulidad del oficio 504 del 04 de Junio de 2013, mediante el cual el Subsecretario de Despacho Área de Talento Humano, niega el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

**Trámite en Primera Instancia**

El trámite de la demanda correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, quien mediante providencia del 31 de octubre del 2013, admitió la demanda, ordenando las notificaciones de Ley (fl. 101).

Surtidas las actuaciones procesales pertinentes, el A-quo, el día 30 de junio de 2015, profirió sentencia (fls 246 a 248). Dentro de la oportunidad legal, la

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
 Rad.: 54-001-33-33-001-2014-00049-01  
 Actor: Marleny Cifuentes Moreno

apoderada de la parte demandante, impetró recurso de apelación en contra de la referida sentencia.

### Trámite en Segunda Instancia

El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida en primera instancia fue admitido por este Tribunal, mediante auto del 10 de septiembre de 2015 (fl. 404).

Con auto del 09 de octubre de 2015 (fl. 412), y por considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procedió a correr traslado para que las partes presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

El día 19 de noviembre de 2015, pasa el expediente al Despacho para que se profiera sentencia de segunda instancia (fl.481).

### CONSIDERACIONES

Al examinar en la página web del Consejo de Estado, el proveído del día 30 de julio de 2015 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, por el cual resolvió avocar el conocimiento del expediente radicado con el No. 15-001-33-33-010-2013-00134-01, demandante Nubia Yomar Plazas Gómez, demandado Nación – Ministerio de Educación – Departamento de Boyacá, con el objeto de proferir sentencia de unificación de jurisprudencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, precisó:

*“En el caso concreto, la solicitud del Tribunal Administrativo de Boyacá se sustenta principalmente en que el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha proferido sentencias encontradas sobre la materia.*

*En efecto, la Corporación, en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, en varias oportunidades ha señalado que las normas legales y reglamentarias que regulan lo relacionado con la administración del personal docente del país, no prevén el reconocimiento de la prima legal o de servicios, por lo que los educadores no tienen derecho a dicho beneficio, así se argumentó, por ejemplo en los fallos de 15 de junio<sup>1</sup> y 7 de diciembre<sup>2</sup> de 2011. Pero también ha dicho la Corporación, que los docentes sí son beneficiarios de la mencionada prima, pues, la Ley 91 de 1989 les hizo extensivo a los educadores el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel central, para quienes el ordenamiento jurídico sí les concede la prima reclamada, así se adujo en fallo de 22 de marzo de 2012<sup>3</sup>.*

<sup>1</sup> Emitido en el expediente 0550-07 con ponencia de la Consejera Ramírez de Páez.

<sup>2</sup> Proferido en el expediente 2200-07 con ponencia del Consejero Luis Rafael Vergara Quintero.

<sup>3</sup> Proferido en el expediente 2483-10 con ponencia del Consejero Gómez Aranguren.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la posición al interior de la Sección Segunda de esta Corporación no ha sido uniforme, se hace necesario unificar la jurisprudencia sobre la materia, y en tal virtud, se avocará conocimiento del expediente de la referencia a fin de proferir sentencia de unificación jurisprudencial en el sub examine.

La trascendencia de la discusión que se evidencia en el presente proceso exige al Juez de lo Contencioso Administrativo, en aras de lograr la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley y la preservación del orden jurídico, en los términos del artículo 103<sup>4</sup> de la Ley 1437 de 2011, y en clara consonancia con su rol de garante en el marco del proceso y conductor del mismo, vincular a personas jurídicas que, con criterios calificados, puedan aportar a la discusión que plantea la presente demanda diversos elementos de juicio para proferir una decisión. Lo anterior, también en ejercicio de los poderes de ordenación e instrucción que el artículo 43<sup>5</sup> de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, le confiere a los jueces.

Atendiendo expresamente lo sostenido en el aparte antes transcrito, se procederá a citar a diferentes sectores relacionados con el régimen salarial y prestacional de los docentes, en aras de enriquecer, se insiste, el debate propio de este trámite."

De lo anteriormente expuesto, el Despacho considera necesario la suspensión del proceso hasta tanto el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa profiera una sentencia de unificación del presente tema, en aras de preservar los principios de economía procesal, seguridad y preservación del orden jurídico y efectividad de los derechos laborales, dado que en la actualidad, el caso similar al que en esta oportunidad es objeto de estudio, está siendo objeto de unificación en esa Corporación.

<sup>4</sup> Artículo 103. *Objeto y principios*. Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga.

Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.

<sup>5</sup> Artículo 43. *Poderes de ordenación e instrucción*. El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción:

1. Resolver los procesos en equidad si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza.
2. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta.
3. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten.
4. Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado.
5. Ratificar, por el medio más expedito posible, la autenticidad y veracidad de las excusas que presenten las partes o sus apoderados o terceros para justificar su inasistencia a audiencias o diligencias. En caso de encontrar inconsistencias o irregularidades, además de rechazar la excusa y aplicar las consecuencias legales que correspondan dentro del proceso o actuación, el juez compulsará copias para las investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar.
6. Los demás que se consagren en la ley.

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-001-2014-00049-01  
Actor: Marleny Cifuentes Moreno

Así las cosas, el Despacho decretará de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado profiera una sentencia que unifique criterios sobre la prima de servicios de docentes.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

### RESUELVE

**PRIMERO:** Decrétese de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado, profiera sentencia de unificación de criterios, sobre la prima de servicios docentes, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ  
Magistrada



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA SECRETARIAL

Por anotación en ESTADO, notifico a las  
partes la providencia anterior, a las 8:00 a.m  
hoy 18 DEC 2015

  
Secretario General



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
**Magistrada Ponente: Dra. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
 San José de Cúcuta, 16 DIC 2015

Radicado : 54-001-33-33-003-2013-00434-01  
 Medio de Control : Nulidad y Restablecimiento del Derecho  
 Demandante : Blanca Edilma Peña Cardenas  
 Demandado : Nación – Ministerio de Educación –  
 Municipio de San José de Cúcuta.

Sería del caso proceder a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada parte demandante en contra de la sentencia proferida el 07 de julio de 2015 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta; si no advirtiera el Despacho que el presente expediente debe ser suspendido, conforme con lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

La demanda de la referencia fue instaurada por la señora Blanca Edilma Peña Cárdenas en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Municipio de San José de Cúcuta, con el objeto que se declare la nulidad del oficio 504 del 24 de Junio de 2013, mediante el cual el Subsecretario de Talento Humano niega el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

**Trámite en Primera Instancia**

El trámite de la demanda correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, quien mediante auto del 20 de febrero de 2014 admitió la presente demanda, ordenando las notificaciones de Ley (fls 85).

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
 Rad.: 54-001-33-33-003-2013-00434-01  
 Actor: Blanca Edilma Peña Cárdenas

Surtidas las actuaciones procesales pertinentes, el A-quo, el día 07 de julio de 2015, profirió sentencia (fls 200 al 204). Dentro de la oportunidad legal, la apoderada de la parte demandante, impetró recurso de apelación en contra de la referida sentencia.

### Trámite en Segunda Instancia

El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida en primera instancia fue admitido por este Tribunal, mediante auto del 23 de septiembre de 2015 (fl. 258).

Con auto del 21 de octubre de 2015 (fl. 266), y por considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procedió a correr traslado para que las partes presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

El día 25 de noviembre de 2015, pasa el expediente al Despacho para que se profiera sentencia de segunda instancia (fl. 340).

### CONSIDERACIONES

Al examinar en la página web del Consejo de Estado, el proveído del día 30 de julio de 2015 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, por el cual resolvió avocar el conocimiento del expediente radicado con el No. 15-001-33-33-010-2013-00134-01, demandante Nubia Yomar Plazas Gómez, demandado Nación – Ministerio de Educación – Departamento de Boyacá, con el objeto de proferir sentencia de unificación de jurisprudencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, precisó:

*“En el caso concreto, la solicitud del Tribunal Administrativo de Boyacá se sustenta principalmente en que el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha proferido sentencias encontradas sobre la materia.*

***En efecto, la Corporación, en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, en varias oportunidades ha señalado que las normas legales y reglamentarias que regulan lo relacionado con la administración del personal docente del país, no prevén el reconocimiento de la prima legal o de servicios, por lo que los educadores no tienen derecho a dicho beneficio, así se argumentó, por ejemplo en los fallos de 15 de junio<sup>1</sup> y 7 de diciembre<sup>2</sup> de 2011. Pero también ha dicho la Corporación, que los docentes sí son beneficiarios de la mencionada prima, pues, la Ley 91 de 1989 les hizo extensivo a los***

<sup>1</sup> Emitido en el expediente 0550-07 con ponencia de la Consejera Ramírez de Páez.

<sup>2</sup> Proferido en el expediente 2200-07 con ponencia del Consejero Luis Rafael Vergara Quintero.

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-003-2013-00434-01  
Actor: Blanca Edilma Peña Cárdenas

**educadores el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel central, para quienes el ordenamiento jurídico sí les concede la prima reclamada, así se adujo en fallo de 22 de marzo de 2012<sup>3</sup>.**

**En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la posición al interior de la Sección Segunda de esta Corporación no ha sido uniforme, se hace necesario unificar la jurisprudencia sobre la materia**, y en tal virtud, se avocará conocimiento del expediente de la referencia a fin de proferir sentencia de unificación jurisprudencial en el sub examine.

La trascendencia de la discusión que se evidencia en el presente proceso exige al Juez de lo Contencioso Administrativo, en aras de lograr la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley y la preservación del orden jurídico, en los términos del artículo 103<sup>4</sup> de la Ley 1437 de 2011, y en clara consonancia con su rol de garante en el marco del proceso y conductor del mismo, vincular a personas jurídicas que, con criterios calificados, puedan aportar a la discusión que plantea la presente demanda diversos elementos de juicio para proferir una decisión. Lo anterior, también en ejercicio de los poderes de ordenación e instrucción que el artículo 43<sup>5</sup> de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, le confiere a los jueces.

Atendiendo expresamente lo sostenido en el aparte antes transcrito, se procederá a citar a diferentes sectores relacionados con el régimen salarial y prestacional de los docentes, en aras de enriquecer, se insiste, el debate propio de este trámite."

De lo anteriormente expuesto, el Despacho considera necesario la suspensión del proceso hasta tanto el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa profiera una sentencia de unificación del presente tema, en aras de preservar los principios de economía procesal, seguridad y preservación del orden jurídico y efectividad de los derechos laborales, dado que en la actualidad,

<sup>3</sup> Proferido en el expediente 2483-10 con ponencia del Consejero Gómez Aranguren.

<sup>4</sup> **Artículo 103. Objeto y principios.** Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga.

Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.

<sup>5</sup> **Artículo 43. Poderes de ordenación e instrucción.** El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción:

1. Resolver los procesos en equidad si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza.
2. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta.
3. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten.
4. Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado.
5. Ratificar, por el medio más expedito posible, la autenticidad y veracidad de las excusas que presenten las partes o sus apoderados o terceros para justificar su inasistencia a audiencias o diligencias. En caso de encontrar inconsistencias o irregularidades, además de rechazar la excusa y aplicar las consecuencias legales que correspondan dentro del proceso o actuación, el juez compulsará copias para las investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar.
6. Los demás que se consagren en la ley.



Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-003-2013-00434-01  
Actor: Blanca Edilma Peña Cárdenas

el caso similar al que en esta oportunidad es objeto de estudio, está siendo objeto de unificación en esa Corporación.

Así las cosas, el Despacho decretará de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado profiera una sentencia que unifique criterios sobre la prima de servicios de docentes.


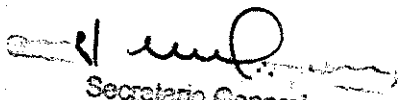
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

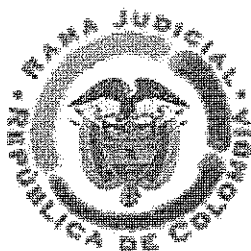
### RESUELVE

**PRIMERO:** Decrétese de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado, profiera sentencia de unificación de criterios, sobre la prima de servicios docentes, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ  
Magistrada

  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA SECRETARIAL  
Por anotación en ESTADO, notifico a las  
partes la providencia anterior, a las 8:00 a.m.  
hoy 18 DEC 2015  
  
Secretario General



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
**Magistrada Ponente: Dra. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
**San José de Cúcuta,**

**16 DE 2015**

Radicado : 54-001-33-33-002-2013-00438-01  
 Medio de Control : **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**  
 Demandante : Agripina García Cáceres  
 Demandado : Nación – Ministerio de Educación –  
 Municipio de San José de Cúcuta.

Sería del caso proceder a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada parte demandante en contra de la sentencia proferida el 24 de junio de 2015 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta; si no advirtiera el Despacho que el presente expediente debe ser suspendido, conforme con lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

La demanda de la referencia fue instaurada por la señora Agripina García Cáceres en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Municipio de San José de Cúcuta, con el objeto que se declare la nulidad del oficio 504 del 04 de Junio de 2013, mediante el cual el Subsecretario de Talento Humano niega el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

**Trámite en Primera Instancia**

El trámite de la demanda correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, quien mediante auto del 30 de septiembre de 2013 admitió la presente demanda, ordenando las notificaciones de Ley (fls 72).

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
 Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00438-01  
 Actor: Agripina García Cáceres

Surtidas las actuaciones procesales pertinentes, el A-quo, el día 24 de junio de 2015, profirió sentencia (fls 189 al 201). Dentro de la oportunidad legal, la apoderada de la parte demandante, impetró recurso de apelación en contra de la referida sentencia.

### Trámite en Segunda Instancia

El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida en primera instancia fue admitido por este Tribunal, mediante auto del 07 de septiembre de 2015 (fl. 263).

Con auto del 09 de octubre de 2015 (fl. 271), y por considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procedió a correr traslado para que las partes presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

El día 19 de noviembre de 2015, pasa el expediente al Despacho para que se profiera sentencia de segunda instancia (fl. 340).

### CONSIDERACIONES

Al examinar en la página web del Consejo de Estado, el proveído del día 30 de julio de 2015 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, por el cual resolvió avocar el conocimiento del expediente radicado con el No. 15-001-33-33-010-2013-00134-01, demandante Nubia Yomar Plazas Gómez, demandado Nación – Ministerio de Educación – Departamento de Boyacá, con el objeto de proferir sentencia de unificación de jurisprudencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, precisó:

*“En el caso concreto, la solicitud del Tribunal Administrativo de Boyacá se sustenta principalmente en que el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha proferido sentencias encontradas sobre la materia.*

***En efecto, la Corporación, en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, en varias oportunidades ha señalado que las normas legales y reglamentarias que regulan lo relacionado con la administración del personal docente del país, no prevén el reconocimiento de la prima legal o de servicios, por lo que los educadores no tienen derecho a dicho beneficio, así se argumentó, por ejemplo en los fallos de 15 de junio<sup>1</sup> y 7 de diciembre<sup>2</sup> de 2011. Pero también ha dicho la Corporación, que los docentes sí son beneficiarios de la mencionada prima, pues, la Ley 91 de 1989 les hizo extensivo a los***

<sup>1</sup> Emitido en el expediente 0550-07 con ponencia de la Consejera Ramírez de Páez.

<sup>2</sup> Proferido en el expediente 2200-07 con ponencia del Consejero Luis Rafael Vergara Quintero.

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00438-01  
Actor: Agripina García Cáceres

**educadores el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel central, para quienes el ordenamiento jurídico sí les concede la prima reclamada, así se adujo en fallo de 22 de marzo de 2012<sup>3</sup>.**

**En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la posición al interior de la Sección Segunda de esta Corporación no ha sido uniforme, se hace necesario unificar la jurisprudencia sobre la materia,** y en tal virtud, se avocará conocimiento del expediente de la referencia a fin de proferir sentencia de unificación jurisprudencial en el sub examine.

La trascendencia de la discusión que se evidencia en el presente proceso exige al Juez de lo Contencioso Administrativo, en aras de lograr la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley y la preservación del orden jurídico, en los términos del artículo 103<sup>4</sup> de la Ley 1437 de 2011, y en clara consonancia con su rol de garante en el marco del proceso y conductor del mismo, vincular a personas jurídicas que, con criterios calificados, puedan aportar a la discusión que plantea la presente demanda diversos elementos de juicio para proferir una decisión. Lo anterior, también en ejercicio de los poderes de ordenación e instrucción que el artículo 43<sup>5</sup> de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, le confiere a los jueces.

Atendiendo expresamente lo sostenido en el aparte antes transcrito, se procederá a citar a diferentes sectores relacionados con el régimen salarial y prestacional de los docentes, en aras de enriquecer, se insiste, el debate propio de este trámite."

De lo anteriormente expuesto, el Despacho considera necesario la suspensión del proceso hasta tanto el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa profiera una sentencia de unificación del presente tema, en aras de preservar los principios de economía procesal, seguridad y preservación del orden jurídico y efectividad de los derechos laborales, dado que en la actualidad,

<sup>3</sup> Proferido en el expediente 2483-10 con ponencia del Consejero Gómez Aranguren.

<sup>4</sup> **Artículo 103. Objeto y principios.** Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga.

Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.

<sup>5</sup> **Artículo 43. Poderes de ordenación e instrucción.** El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción:

1. Resolver los procesos en equidad si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza.
2. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta.
3. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten.
4. Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado.
5. Ratificar, por el medio más expedito posible, la autenticidad y veracidad de las excusas que presenten las partes o sus apoderados o terceros para justificar su inasistencia a audiencias o diligencias. En caso de encontrar inconsistencias o irregularidades, además de rechazar la excusa y aplicar las consecuencias legales que correspondan dentro del proceso o actuación, el juez compulsará copias para las investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar.
6. Los demás que se consagren en la ley.

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00438-01  
Actor: Agripina García Cáceres

el caso similar al que en esta oportunidad es objeto de estudio, está siendo objeto de unificación en esa Corporación.

Así las cosas, el Despacho decretará de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado profiera una sentencia que unifique criterios sobre la prima de servicios de docentes.


En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

### RESUELVE

**PRIMERO:** Decrétese de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado, profiera sentencia de unificación de criterios, sobre la prima de servicios docentes, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ  
Magistrada

 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO  
Por anotación en ESTADO, notifico a las  
partes la providencia anterior, a las 6:00 a.m.  
hoy 18 DEC 2015

  
Secretario General



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**

**Magistrada Ponente: Dra. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**

**San José de Cúcuta, 16 DIC 2015**

Radicado : 54-001-33-33-003-2013-00461-01  
 Medio de Control : **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**  
 Demandante : María Helena Bautista Rodríguez  
 Demandado : Nación – Ministerio de Educación –  
 Departamento Norte de Santander.

Sería del caso proceder a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 10 de junio de 2015 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta; si no advirtiera el Despacho que el presente expediente debe ser suspendido de oficio, conforme con lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

La demanda de la referencia fue instaurada por la señora María Helena Bautista Rodríguez en contra de Nación – Ministerio de Educación – Departamento Norte de Santander, con el objeto que se declare la nulidad del oficio del 03 de Julio de 2013, mediante el cual la secretaria de Educación Departamental niega el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

**Trámite en Primera Instancia**

El trámite de la demanda correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta quien mediante providencia del 21 de noviembre de 2013, admitió la demanda, ordenando las notificaciones de Ley (fl. 64).

Surtidas las actuaciones procesales pertinentes, el A-quo, el día 10 de junio de 2015, profirió sentencia (fls 150 al 151). Dentro de la oportunidad legal, la

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
 Rad.: 54-001-33-33-003-2013-00461-01  
 Actor: María Helena Bautista Rodríguez

apoderada de la parte demandante, impetró recurso de apelación en contra de la referida sentencia.

### Trámite en Segunda Instancia

El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida en primera instancia fue admitido por este Tribunal, mediante auto del 25 de agosto de 2015 (fl. 207).

Con auto del 09 de octubre de 2015 (fl. 215), y por considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procedió a correr traslado para que las partes presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

El día 19 de noviembre de 2015, pasa el expediente al Despacho para que se profiera sentencia de segunda instancia (fl.284).

### CONSIDERACIONES

Al examinar en la página web del Consejo de Estado, el proveído del día 30 de julio de 2015 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, por el cual resolvió avocar el conocimiento del expediente radicado con el No. 15-001-33-33-010-2013-00134-01, demandante Nubia Yomar Plazas Gómez, demandado Nación – Ministerio de Educación – Departamento de Boyacá, con el objeto de proferir sentencia de unificación de jurisprudencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, precisó:

*“En el caso concreto, la solicitud del Tribunal Administrativo de Boyacá se sustenta principalmente en que el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha proferido sentencias encontradas sobre la materia.*

*En efecto, la Corporación, en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, en varias oportunidades ha señalado que las normas legales y reglamentarias que regulan lo relacionado con la administración del personal docente del país, no prevén el reconocimiento de la prima legal o de servicios, por lo que los educadores no tienen derecho a dicho beneficio, así se argumentó, por ejemplo en los fallos de 15 de junio<sup>1</sup> y 7 de diciembre<sup>2</sup> de 2011. Pero también ha dicho la Corporación, que los docentes sí son beneficiarios de la mencionada prima, pues, la Ley 91 de 1989 les hizo extensivo a los educadores el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel central, para quienes el ordenamiento jurídico sí les concede la prima reclamada, así se adujo en fallo de 22 de marzo de 2012<sup>3</sup>.*

<sup>1</sup> Emitido en el expediente 0550-07 con ponencia de la Consejera Ramírez de Páez.

<sup>2</sup> Proferido en el expediente 2200-07 con ponencia del Consejero Luis Rafael Vergara Quintero.

<sup>3</sup> Proferido en el expediente 2483-10 con ponencia del Consejero Gómez Aranguren.

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-003-2013-00461-01  
Actor: María Helena Bautista Rodríguez

**En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la posición al interior de la Sección Segunda de esta Corporación no ha sido uniforme, se hace necesario unificar la jurisprudencia sobre la materia, y en tal virtud, se avocará conocimiento del expediente de la referencia a fin de proferir sentencia de unificación jurisprudencial en el sub examine.**

La trascendencia de la discusión que se evidencia en el presente proceso exige al Juez de lo Contencioso Administrativo, en aras de lograr la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley y la preservación del orden jurídico, en los términos del artículo 103<sup>4</sup> de la Ley 1437 de 2011, y en clara consonancia con su rol de garante en el marco del proceso y conductor del mismo, vincular a personas jurídicas que, con criterios calificados, puedan aportar a la discusión que plantea la presente demanda diversos elementos de juicio para proferir una decisión. Lo anterior, también en ejercicio de los poderes de ordenación e instrucción que el artículo 43<sup>5</sup> de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, le confiere a los jueces.

Atendiendo expresamente lo sostenido en el aparte antes transcrito, se procederá a citar a diferentes sectores relacionados con el régimen salarial y prestacional de los docentes, en aras de enriquecer, se insiste, el debate propio de este trámite."

De lo anteriormente expuesto, el Despacho considera necesario la suspensión del proceso hasta tanto el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa profiera una sentencia de unificación del presente tema, en aras de preservar los principios de economía procesal, seguridad y preservación del orden jurídico y efectividad de los derechos laborales, dado que en la actualidad, el caso similar al que en esta oportunidad es objeto de estudio, está siendo objeto de unificación en esa Corporación.

<sup>4</sup> Artículo 103. **Objeto y principios.** Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga.

Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.

<sup>5</sup> Artículo 43. **Poderes de ordenación e instrucción.** El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción:

1. Resolver los procesos en equidad si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza.
2. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta.
3. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten.
4. Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado.
5. Ratificar, por el medio más expedito posible, la autenticidad y veracidad de las excusas que presenten las partes o sus apoderados o terceros para justificar su inasistencia a audiencias o diligencias. En caso de encontrar inconsistencias o irregularidades, además de rechazar la excusa y aplicar las consecuencias legales que correspondan dentro del proceso o actuación, el juez compulsará copias para las investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar.
6. Los demás que se consagren en la ley.



Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-003-2013-00461-01  
Actor: María Helena Bautista Rodríguez

Así las cosas, el Despacho decretará de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado profiera una sentencia que unifique criterios sobre la prima de servicios de docentes.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

### RESUELVE

**PRIMERO:** Decrétese de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado, profiera sentencia de unificación de criterios, sobre la prima de servicios docentes, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia..

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

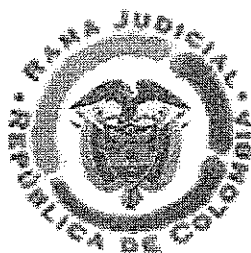
  
MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ  
Magistrada



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA SECRETARIAL

Por anotación en ESTADO, notifico a las  
partes la providencia anterior, a las 8:00 a.m  
hoy 18 DEC 2015

  
Secretario General



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
**Magistrada Ponente: Dra. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
**San José de Cúcuta, 16 DIC 2015**

Radicado : 54-001-33-33-003-2013-00495-01  
Medio de Control : **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**  
Demandante : Jesús Antonio Vera  
Demandado : Nación – Ministerio de Educación –  
Departamento Norte de Santander

Sería del caso proceder a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada parte demandante en contra de la sentencia proferida el 08 de julio de 2015 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta; si no advirtiera el Despacho que el presente expediente debe ser suspendido, conforme con lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

La demanda de la referencia fue instaurada por el señor Jesús Antonio Vera Del Real en contra de la Nación – Ministerio de Educación –Departamento Norte De Santander, con el objeto que se declare la nulidad del oficio 700.7040.39 del 24 de Junio de 2013, mediante el cual la Secretaria de Educación Departamental niega el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

**Trámite en Primera Instancia**

El trámite de la demanda correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, quien mediante auto del 13 de diciembre de 2013 admitió la presente demanda, ordenando las notificaciones de Ley (fls 65).

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00495-01  
Actor: Jesús Antonio Vera Del Real

Surtidas las actuaciones procesales pertinentes, el A-quo, el día 08 de julio de 2015, profirió sentencia (fls 149 al 153). Dentro de la oportunidad legal, la apoderada de la parte demandante, impetró recurso de apelación en contra de la referida sentencia.

### Trámite en Segunda Instancia

El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida en primera instancia fue admitido por este Tribunal, mediante auto del 23 de septiembre de 2015 (fl. 207).

Con auto del 21 de octubre de 2015 (fl. 215), y por considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procedió a correr traslado para que las partes presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

El día 26 de noviembre de 2015, pasa el expediente al Despacho para que se profiera sentencia de segunda instancia (fl. 284).

### CONSIDERACIONES

Al examinar en la página web del Consejo de Estado, el proveído del día 30 de julio de 2015 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, por el cual resolvió avocar el conocimiento del expediente radicado con el No. 15-001-33-33-010-2013-00134-01, demandante Nubia Yomar Plazas Gómez, demandado Nación – Ministerio de Educación – Departamento de Boyacá, con el objeto de proferir sentencia de unificación de jurisprudencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, precisó:

*“En el caso concreto, la solicitud del Tribunal Administrativo de Boyacá se sustenta principalmente en que el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha proferido sentencias encontradas sobre la materia.*

*En efecto, la Corporación, en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, en varias oportunidades ha señalado que las normas legales y reglamentarias que regulan lo relacionado con la administración del personal docente del país, no prevén el reconocimiento de la prima legal o de servicios, por lo que los educadores no tienen derecho a dicho beneficio, así se argumentó, por ejemplo en los fallos de 15 de junio<sup>1</sup> y 7 de diciembre<sup>2</sup> de 2011. Pero también ha dicho la Corporación, que los docentes sí son beneficiarios*

<sup>1</sup> Emitido en el expediente 0550-07 con ponencia de la Consejera Ramírez de Páez.

<sup>2</sup> Proferido en el expediente 2200-07 con ponencia del Consejero Luis Rafael Vergara Quintero.

**de la mencionada prima, pues, la Ley 91 de 1989 les hizo extensivo a los educadores el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel central, para quienes el ordenamiento jurídico sí les concede la prima reclamada, así se adujo en fallo de 22 de marzo de 2012<sup>3</sup>.**

**En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la posición al interior de la Sección Segunda de esta Corporación no ha sido uniforme, se hace necesario unificar la jurisprudencia sobre la materia,** y en tal virtud, se avocará conocimiento del expediente de la referencia a fin de proferir sentencia de unificación jurisprudencial en el sub examine.

La trascendencia de la discusión que se evidencia en el presente proceso exige al Juez de lo Contencioso Administrativo, en aras de lograr la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley y la preservación del orden jurídico, en los términos del artículo 103<sup>4</sup> de la Ley 1437 de 2011, y en clara consonancia con su rol de garante en el marco del proceso y conductor del mismo, vincular a personas jurídicas que, con criterios calificados, puedan aportar a la discusión que plantea la presente demanda diversos elementos de juicio para proferir una decisión. Lo anterior, también en ejercicio de los poderes de ordenación e instrucción que el artículo 43<sup>5</sup> de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, le confiere a los jueces.

Atendiendo expresamente lo sostenido en el aparte antes transcrito, se procederá a citar a diferentes sectores relacionados con el régimen salarial y prestacional de los docentes, en aras de enriquecer, se insiste, el debate propio de este trámite."

De lo anteriormente expuesto, el Despacho considera necesario la suspensión del proceso hasta tanto el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa profiera una sentencia de unificación del presente tema, en aras de preservar los principios de economía procesal, seguridad y preservación del orden jurídico y efectividad de los derechos laborales, dado que en la actualidad,

<sup>3</sup> Proferido en el expediente 2483-10 con ponencia del Consejero Gómez Aranguren.

<sup>4</sup> **Artículo 103. Objeto y principios.** Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga.

Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.

<sup>5</sup> **Artículo 43. Poderes de ordenación e instrucción.** El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción:

1. Resolver los procesos en equidad si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza.
2. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta.
3. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten.
4. Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado.
5. Ratificar, por el medio más expedito posible, la autenticidad y veracidad de las excusas que presenten las partes o sus apoderados o terceros para justificar su inasistencia a audiencias o diligencias. En caso de encontrar inconsistencias o irregularidades, además de rechazar la excusa y aplicar las consecuencias legales que correspondan dentro del proceso o actuación, el juez compulsará copias para las investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar.
6. Los demás que se consagren en la ley.

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00495-01  
Actor: Jesús Antonio Vera Del Real

el caso similar al que en esta oportunidad es objeto de estudio, está siendo objeto de unificación en esa Corporación.

Así las cosas, el Despacho decretará de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado profiera una sentencia que unifique criterios sobre la prima de servicios de docentes.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

### RESUELVE

**PRIMERO:** Decrétese de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado, profiera sentencia de unificación de criterios, sobre la prima de servicios docentes, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ  
Magistrada



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA SECRETARIAL

Por anotación en ESTADO, notifico a las  
partes la providencia anterior, a las 8:00 a.m.  
hoy 18 DEC 2015

  
Secretario General



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
**Magistrada Ponente: Dra. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
**San José de Cúcuta,** 16 DIC 2015

Radicado : 54-001-33-33-003-2013-00499-01  
Medio de Control : **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**  
Demandante : Nubia Cecilia Pérez Sánchez  
Demandado : Nación – Ministerio de Educación –  
Departamento Norte De Santander.

Sería del caso proceder a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada parte demandante en contra de la sentencia proferida el 08 de julio de 2015 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta; si no advirtiera el Despacho que el presente expediente debe ser suspendido, conforme con lo siguiente:

#### **ANTECEDENTES**

La demanda de la referencia fue instaurada por la señora Nubia Cecilia Pérez Sánchez en contra de la Nación – Ministerio de Educación –Departamento Norte de Santander, con el objeto que se declare la nulidad del oficio 7000.7040.39 del 24 de Junio de 2013, mediante el cual la Secretaria de Educación Departamental niega el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

#### **Trámite en Primera Instancia**

El trámite de la demanda correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, quien mediante auto del 13 de diciembre de 2013 admitió la presente demanda, ordenando las notificaciones de Ley (fls 64).

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
 Rad.: 54-001-33-33-003-2013-00499-01  
 Actor: Nubia Cecilia Pérez Sánchez

Surtidas las actuaciones procesales pertinentes, el A-quo, el día 08 de julio de 2015, profirió sentencia (fls 181 al 185). Dentro de la oportunidad legal, la apoderada de la parte demandante, impetró recurso de apelación en contra de la referida sentencia.

### Trámite en Segunda Instancia

El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida en primera instancia fue admitido por este Tribunal, mediante auto del 23 de septiembre de 2015 (fl. 239).

Con auto del 21 de octubre de 2015 (fl. 248), y por considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procedió a correr traslado para que las partes presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

El día 25 de noviembre de 2015, pasa el expediente al Despacho para que se profiera sentencia de segunda instancia (fl. 317).

### CONSIDERACIONES

Al examinar en la página web del Consejo de Estado, el proveído del día 30 de julio de 2015 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, por el cual resolvió avocar el conocimiento del expediente radicado con el No. 15-001-33-33-010-2013-00134-01, demandante Nubia Yomar Plazas Gómez, demandado Nación – Ministerio de Educación – Departamento de Boyacá, con el objeto de proferir sentencia de unificación de jurisprudencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, precisó:

*"En el caso concreto, la solicitud del Tribunal Administrativo de Boyacá se sustenta principalmente en que el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha proferido sentencias encontradas sobre la materia.*

***En efecto, la Corporación, en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, en varias oportunidades ha señalado que las normas legales y reglamentarias que regulan lo relacionado con la administración del personal docente del país, no prevén el reconocimiento de la prima legal o de servicios, por lo que los educadores no tienen derecho a dicho beneficio, así se argumentó, por ejemplo en los fallos de 15 de junio<sup>1</sup> y 7 de diciembre<sup>2</sup> de 2011. Pero también ha dicho la Corporación, que los docentes sí son beneficiarios***

<sup>1</sup> Emitido en el expediente 0550-07 con ponencia de la Consejera Ramírez de Páez.

<sup>2</sup> Proferido en el expediente 2200-07 con ponencia del Consejero Luis Rafael Vergara Quintero.

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-003-2013-00499-01  
Actor: Nubia Cecilia Pérez Sánchez

**de la mencionada prima, pues, la Ley 91 de 1989 les hizo extensivo a los educadores el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel central, para quienes el ordenamiento jurídico sí les concede la prima reclamada, así se adujo en fallo de 22 de marzo de 2012<sup>3</sup>.**

**En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la posición al interior de la Sección Segunda de esta Corporación no ha sido uniforme, se hace necesario unificar la jurisprudencia sobre la materia** y en tal virtud, se avocará conocimiento del expediente de la referencia a fin de proferir sentencia de unificación jurisprudencial en el sub examine.

La trascendencia de la discusión que se evidencia en el presente proceso exige al Juez de lo Contencioso Administrativo, en aras de lograr la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley y la preservación del orden jurídico, en los términos del artículo 103<sup>4</sup> de la Ley 1437 de 2011, y en clara consonancia con su rol de garante en el marco del proceso y conductor del mismo, vincular a personas jurídicas que, con criterios calificados, puedan aportar a la discusión que plantea la presente demanda diversos elementos de juicio para proferir una decisión. Lo anterior, también en ejercicio de los poderes de ordenación e instrucción que el artículo 43<sup>5</sup> de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, le confiere a los jueces.

Atendiendo expresamente lo sostenido en el aparte antes transcrito, se procederá a citar a diferentes sectores relacionados con el régimen salarial y prestacional de los docentes, en aras de enriquecer, se insiste, el debate propio de este trámite."

De lo anteriormente expuesto, el Despacho considera necesario la suspensión del proceso hasta tanto el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa profiera una sentencia de unificación del presente tema, en aras de preservar los principios de economía procesal, seguridad y preservación del orden jurídico y efectividad de los derechos laborales, dado que en la actualidad,

<sup>3</sup> Proferido en el expediente 2483-10 con ponencia del Consejero Gómez Aranguren.

<sup>4</sup> **Artículo 103. Objeto y principios.** Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga.

Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.

<sup>5</sup> **Artículo 43. Poderes de ordenación e instrucción.** El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción:

1. Resolver los procesos en equidad si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza.
2. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta.
3. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten.
4. Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado.
5. Ratificar, por el medio más expedito posible, la autenticidad y veracidad de las excusas que presenten las partes o sus apoderados o terceros para justificar su inasistencia a audiencias o diligencias. En caso de encontrar inconsistencias o irregularidades, además de rechazar la excusa y aplicar las consecuencias legales que correspondan dentro del proceso o actuación, el juez compulsará copias para las investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar.
6. Los demás que se consagren en la ley.



Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-003-2013-00499-01  
Actor: Nubia Cecilia Pérez Sánchez

el caso similar al que en esta oportunidad es objeto de estudio, está siendo objeto de unificación en esa Corporación.

Así las cosas, el Despacho decretará de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado profiera una sentencia que unifique criterios sobre la prima de servicios de docentes.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

### RESUELVE

**PRIMERO:** Decrétese de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado, profiera sentencia de unificación de criterios, sobre la prima de servicios docentes, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

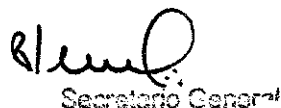
### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ  
Magistrada



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONCIENCIA SECRETARIAL

Por anotación en ESTADO, notifico a las  
partes la providencia anterior, a las 8:00 a.m.  
hoy 18 DEC 2015

  
Secretario General



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER  
Magistrada Ponente: Dra. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ  
San José de Cúcuta, 18 DIC 2015

Radicado : 54-001-33-33-002-2013-00605-01  
Demandante : Elizabeth Moncada Gutiérrez  
Demandado : Nación – Ministerio de Educación –  
Municipio de San José de Cúcuta.  
Medio de Control : **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**

Sería del caso proceder a resolver los recursos de apelación interpuestos por la apoderada parte demandante y la Procuradora 98 Judicial para Asuntos Administrativos de Cúcuta en contra de la sentencia proferida el 24 de junio de 2015 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta; si no advirtiera el Despacho que el presente expediente debe ser suspendido de oficio, conforme con lo siguiente:

#### ANTECEDENTES

La demanda de la referencia fue instaurada por la señora Elizabeth Moncada Gutiérrez en contra de Nación – Ministerio de Educación – Municipio de San José de Cúcuta, con el objeto que se declare la nulidad del oficio 504 del 11 de Junio de 2013, mediante el cual el Subsecretario Área de Talento Humano niega el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

#### Trámite en Primera Instancia

El trámite de la demanda correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, quien mediante auto del 14 de enero de 2014 avocó conocimiento de la presente demanda, y a través de auto del 10 de abril de 2014 admitió la demanda ordenando las notificaciones de Ley (fl.91).

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00605-01  
Actor: Elizabeth Moncada Gutiérrez

Surtidas las actuaciones procesales pertinentes, el A-quo, el día 24 de junio de 2015, profirió sentencia (fls 191 al 203). Dentro de la oportunidad legal, la apoderada de la parte demandante y la Procuradora 98 Judicial para Asuntos Administrativos de Cúcuta impetraron recurso de apelación en contra de la referida sentencia.

### Trámite en Segunda Instancia

Los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia proferida en primera instancia fueron admitidos por este Tribunal, mediante auto del 10 de septiembre de 2015 (fl. 265).

Con auto del 09 de octubre de 2015 (fl. 273), y por considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procedió a correr traslado para que las partes presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

El día 19 de noviembre de 2015, pasa el expediente al Despacho para que se profiera sentencia de segunda instancia (fl. 342).

### CONSIDERACIONES

Al examinar en la página web del Consejo de Estado, el proveído del día 30 de julio de 2015 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, por el cual resolvió avocar el conocimiento del expediente radicado con el No. 15-001-33-33-010-2013-00134-01, demandante Nubia Yomar Plazas Gómez, demandado Nación – Ministerio de Educación – Departamento de Boyacá, con el objeto de proferir sentencia de unificación de jurisprudencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, precisó:

*“En el caso concreto, la solicitud del Tribunal Administrativo de Boyacá se sustenta principalmente en que el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha proferido sentencias encontradas sobre la materia.*

*En efecto, la Corporación, en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, en varias oportunidades ha señalado que las normas legales y reglamentarias que regulan lo relacionado con la administración del personal docente del país, no prevén el reconocimiento de la prima legal o de servicios, por lo que los educadores no tienen derecho a dicho beneficio, así se argumentó, por ejemplo en los fallos de 15 de junio<sup>1</sup> y 7 de diciembre<sup>2</sup> de 2011. Pero también ha dicho la Corporación, que los docentes sí son beneficiarios*

<sup>1</sup> Emitido en el expediente 0550-07 con ponencia de la Consejera Ramírez de Páez.

<sup>2</sup> Proferido en el expediente 2200-07 con ponencia del Consejero Luis Rafael Vergara Quintero.

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
 Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00605-01  
 Actor: Elizabeth Moncada Gutiérrez

**de la mencionada prima, pues, la Ley 91 de 1989 les hizo extensivo a los educadores el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel central, para quienes el ordenamiento jurídico sí les concede la prima reclamada, así se adujo en fallo de 22 de marzo de 2012<sup>3</sup>.**

**En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la posición al interior de la Sección Segunda de esta Corporación no ha sido uniforme, se hace necesario unificar la jurisprudencia sobre la materia, y en tal virtud, se avocará conocimiento del expediente de la referencia a fin de proferir sentencia de unificación jurisprudencial en el sub examine.**

La trascendencia de la discusión que se evidencia en el presente proceso exige al Juez de lo Contencioso Administrativo, en aras de lograr la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley y la preservación del orden jurídico, en los términos del artículo 103<sup>4</sup> de la Ley 1437 de 2011, y en clara consonancia con su rol de garante en el marco del proceso y conductor del mismo, vincular a personas jurídicas que, con criterios calificados, puedan aportar a la discusión que plantea la presente demanda diversos elementos de juicio para proferir una decisión. Lo anterior, también en ejercicio de los poderes de ordenación e instrucción que el artículo 43<sup>5</sup> de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, le confiere a los jueces.

Atendiendo expresamente lo sostenido en el aparte antes transcrito, se procederá a citar a diferentes sectores relacionados con el régimen salarial y prestacional de los docentes, en aras de enriquecer, se insiste, el debate propio de este trámite."

De lo anteriormente expuesto, el Despacho considera necesario la suspensión del proceso de oficio, hasta tanto el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa profiera una sentencia de unificación del presente tema, en aras de preservar los principios de economía procesal, seguridad y preservación del orden jurídico y efectividad de los derechos laborales, dado que en la actualidad,

<sup>3</sup> Proferido en el expediente 2483-10 con ponencia del Consejero Gómez Aranguren.

<sup>4</sup> **Artículo 103. Objeto y principios.** Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga.

Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.

<sup>5</sup> **Artículo 43. Poderes de ordenación e instrucción.** El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción:

1. Resolver los procesos en equidad si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza.
2. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta.
3. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten.
4. Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado.
5. Ratificar, por el medio más expedito posible, la autenticidad y veracidad de las excusas que presenten las partes o sus apoderados o terceros para justificar su inasistencia a audiencias o diligencias. En caso de encontrar inconsistencias o irregularidades, además de rechazar la excusa y aplicar las consecuencias legales que correspondan dentro del proceso o actuación, el juez compulsará copias para las investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar.
6. Los demás que se consagren en la ley.

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00605-01  
Actor: Elizabeth Moncada Gutiérrez

el caso similar al que en esta oportunidad es objeto de estudio, está siendo objeto de unificación en esa Corporación.

Así las cosas, el Despacho decretará la suspensión del presente proceso de oficio, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado profiera una sentencia que unifique criterios sobre la prima de servicios de docentes.


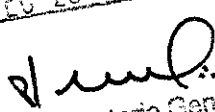
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

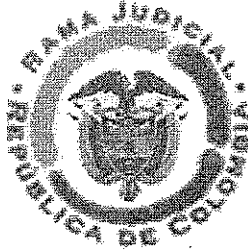
### RESUELVE

**PRIMERO:** Decrétese de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado, profiera sentencia de unificación de criterios, sobre la prima de servicios docentes, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ  
Magistrada

  
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA SECRETARIAL  
Por anotación en ESTADO, notifíco a las  
partes la providencia anterior, a las 3:00 a.m.  
hoy 11 8 DEC 2015  
  
Secretario General



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
**Magistrada Ponente: Dra. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
 San José de Cúcuta, 16 DIC 2015

Radicado : 54-001-33-33-002-2013-00608-01  
 Medio de Control : **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**  
 Demandante : Cristina Silva Roperó  
 Demandado : Nación – Ministerio de Educación –  
 Municipio de San José de Cúcuta.

Sería del caso proceder a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada parte demandante en contra de la sentencia proferida el 24 de junio de 2015 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta; si no advirtiera el Despacho que el presente expediente debe ser suspendido, conforme con lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

La demanda de la referencia fue instaurada por la señora Cristina Silva Roperó en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Municipio de San José de Cúcuta, con el objeto que se declare la nulidad del oficio 504 del 04 de Junio de 2013, mediante el cual el Subsecretario de Talento Humano niega el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

**Trámite en Primera Instancia**

El trámite de la demanda correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, quien mediante auto del 10 de abril de 2014 admitió la presente demanda, ordenando las notificaciones de Ley (fls 86).

*Auto Decreta Suspensión Del Proceso*  
*Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00608-01*  
*Actor: Cristina Silva Roperó*

Surtidas las actuaciones procesales pertinentes, el A-quo, el día 24 de junio de 2015, profirió sentencia (fls 169 al 181). Dentro de la oportunidad legal, la apoderada de la parte demandante, impetró recurso de apelación en contra de la referida sentencia.

### **Trámite en Segunda Instancia**

El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida en primera instancia fue admitido por este Tribunal, mediante auto del 16 de septiembre de 2015 (fl. 261).

Con auto del 09 de octubre de 2015 (fl. 269), y por considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procedió a correr traslado para que las partes presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

El día 17 de noviembre de 2015, pasa el expediente al Despacho para que se profiera sentencia de segunda instancia (fl. 338).

### **CONSIDERACIONES**

Al examinar en la página web del Consejo de Estado, el proveído del día 30 de julio de 2015 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, por el cual resolvió avocar el conocimiento del expediente radicado con el No. 15-001-33-33-010-2013-00134-01, demandante Nubia Yomar Plazas Gómez, demandado Nación – Ministerio de Educación – Departamento de Boyacá, con el objeto de proferir sentencia de unificación de jurisprudencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, precisó:

*“En el caso concreto, la solicitud del Tribunal Administrativo de Boyacá se sustenta principalmente en que el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha proferido sentencias encontradas sobre la materia.*

*En efecto, la Corporación, en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, en varias oportunidades ha señalado que las normas legales y reglamentarias que regulan lo relacionado con la administración del personal docente del país, no prevén el reconocimiento de la prima legal o de servicios, por lo que los educadores no tienen derecho a dicho beneficio, así se argumentó, por ejemplo en los fallos de 15 de junio<sup>1</sup> y 7 de diciembre<sup>2</sup> de 2011. Pero también ha dicho la Corporación, que los docentes sí son beneficiarios de la mencionada prima, pues, la Ley 91 de 1989 les hizo extensivo a los*

<sup>1</sup> Emitido en el expediente 0550-07 con ponencia de la Consejera Ramírez de Páez.

<sup>2</sup> Proferido en el expediente 2200-07 con ponencia del Consejero Luis Rafael Vergara Quintero.

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00608-01  
Actor: Cristina Silva Ropero

**educadores el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel central, para quienes el ordenamiento jurídico sí les concede la prima reclamada, así se adujo en fallo de 22 de marzo de 2012<sup>3</sup>.**

**En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la posición al interior de la Sección Segunda de esta Corporación no ha sido uniforme, se hace necesario unificar la jurisprudencia sobre la materia**, y en tal virtud, se avocará conocimiento del expediente de la referencia a fin de proferir sentencia de unificación jurisprudencial en el sub examine.

La trascendencia de la discusión que se evidencia en el presente proceso exige al Juez de lo Contencioso Administrativo, en aras de lograr la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley y la preservación del orden jurídico, en los términos del artículo 103<sup>4</sup> de la Ley 1437 de 2011, y en clara consonancia con su rol de garante en el marco del proceso y conductor del mismo, vincular a personas jurídicas que, con criterios calificados, puedan aportar a la discusión que plantea la presente demanda diversos elementos de juicio para proferir una decisión. Lo anterior, también en ejercicio de los poderes de ordenación e instrucción que el artículo 43<sup>5</sup> de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, le confiere a los jueces.

Atendiendo expresamente lo sostenido en el aparte antes transcrito, se procederá a citar a diferentes sectores relacionados con el régimen salarial y prestacional de los docentes, en aras de enriquecer, se insiste, el debate propio de este trámite."

De lo anteriormente expuesto, el Despacho considera necesario la suspensión del proceso hasta tanto el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa profiera una sentencia de unificación del presente tema, en aras de preservar los principios de economía procesal, seguridad y preservación del orden jurídico y efectividad de los derechos laborales, dado que en la actualidad,

<sup>3</sup> Proferido en el expediente 2483-10 con ponencia del Consejero Gómez Aranguren.

<sup>4</sup> **Artículo 103. Objeto y principios.** Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga.

Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.

<sup>5</sup> **Artículo 43. Poderes de ordenación e instrucción.** El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción:

1. Resolver los procesos en equidad si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza.
2. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta.
3. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten.
4. Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado.
5. Ratificar, por el medio más expedito posible, la autenticidad y veracidad de las excusas que presenten las partes o sus apoderados o terceros para justificar su inasistencia a audiencias o diligencias. En caso de encontrar inconsistencias o irregularidades, además de rechazar la excusa y aplicar las consecuencias legales que correspondan dentro del proceso o actuación, el juez compulsará copias para las investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar.
6. Los demás que se consagren en la ley.



Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00608-01  
Actor: Cristina Silva Ropero

el caso similar al que en esta oportunidad es objeto de estudio, está siendo objeto de unificación en esa Corporación.

Así las cosas, el Despacho decretará de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado profiera una sentencia que unifique criterios sobre la prima de servicios de docentes.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

### RESUELVE

**PRIMERO:** Decrétese de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado, profiera sentencia de unificación de criterios, sobre la prima de servicios docentes, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ  
Magistrada



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA SECRETARIAL

Por anotación en ESTADO, notifico a las partes la providencia anterior, a las 3:00 a.m. hoy 18 DEC 2015

  
Secretario General



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
**Magistrada Ponente: Dra. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
**San José de Cúcuta, 16 DIC 2015**

Radicado : 54-001-33-33-002-2013-00624-01  
 Medio de Control : **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**  
 Demandante : Gloria Cecilia Serrano  
 Demandado : Nación – Ministerio de Educación –  
 Municipio de San José de Cúcuta.

Sería del caso proceder a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada parte demandante en contra de la sentencia proferida el 07 de julio de 2015 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta; si no advirtiera el Despacho que el presente expediente debe ser suspendido, conforme con lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

La demanda de la referencia fue instaurada por la señora Gloria Cecilia Serrano en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Municipio de San José de Cúcuta, con el objeto que se declare la nulidad del oficio 504 del 24 de Junio de 2013, mediante el cual el Subsecretario de Talento Humano niega el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

**Trámite en Primera Instancia**

El trámite de la demanda correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, quien mediante auto del 14 de enero de 2014 avocó conocimiento y admitió la presente demanda, ordenando las notificaciones de Ley (fls 66 al 67).

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00624-01  
Actor: Gloria Cecilia Serrano

Surtidas las actuaciones procesales pertinentes, el A-quo, el día 07 de julio de 2015, profirió sentencia (fls 178 al 182). Dentro de la oportunidad legal, la apoderada de la parte demandante, impetró recurso de apelación en contra de la referida sentencia.

### **Trámite en Segunda Instancia**

El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida en primera instancia fue admitido por este Tribunal, mediante auto del 23 de septiembre de 2015 (fl. 243).

Con auto del 21 de octubre de 2015 (fl. 252), y por considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 4° del artículo 247 del CPACA, se procedió a correr traslado para que las partes presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

El día 26 de noviembre de 2015, pasa el expediente al Despacho para que se profiera sentencia de segunda instancia (fl. 326).

### **CONSIDERACIONES**

Al examinar en la página web del Consejo de Estado, el proveído del día 30 de julio de 2015 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, por el cual resolvió avocar el conocimiento del expediente radicado con el No. 15-001-33-33-010-2013-00134-01, demandante Nubia Yomar Plazas Gómez, demandado Nación – Ministerio de Educación – Departamento de Boyacá, con el objeto de proferir sentencia de unificación de jurisprudencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, precisó:

*“En el caso concreto, la solicitud del Tribunal Administrativo de Boyacá se sustenta principalmente en que el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha proferido sentencias encontradas sobre la materia.*

***En efecto, la Corporación, en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, en varias oportunidades ha señalado que las normas legales y reglamentarias que regulan lo relacionado con la administración del personal docente del país, no prevén el reconocimiento de la prima legal o de servicios, por lo que los educadores no tienen derecho a dicho beneficio, así se argumentó, por ejemplo en los fallos de 15 de junio<sup>1</sup> y 7 de diciembre<sup>2</sup> de 2011. Pero también ha dicho la Corporación, que los docentes sí son beneficiarios***

<sup>1</sup> Emitido en el expediente 0550-07 con ponencia de la Consejera Ramírez de Páez.

<sup>2</sup> Proferido en el expediente 2200-07 con ponencia del Consejero Luis Rafael Vergara Quintero.

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00624-01  
Actor: Gloria Cecilia Serrano

**de la mencionada prima, pues, la Ley 91 de 1989 les hizo extensivo a los educadores el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel central, para quienes el ordenamiento jurídico sí les concede la prima reclamada, así se adujo en fallo de 22 de marzo de 2012<sup>3</sup>.**

**En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la posición al interior de la Sección Segunda de esta Corporación no ha sido uniforme, se hace necesario unificar la jurisprudencia sobre la materia**, y en tal virtud, se avocará conocimiento del expediente de la referencia a fin de proferir sentencia de unificación jurisprudencial en el sub examine.

La trascendencia de la discusión que se evidencia en el presente proceso exige al Juez de lo Contencioso Administrativo, en aras de lograr la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley y la preservación del orden jurídico, en los términos del artículo 103<sup>4</sup> de la Ley 1437 de 2011, y en clara consonancia con su rol de garante en el marco del proceso y conductor del mismo, vincular a personas jurídicas que, con criterios calificados, puedan aportar a la discusión que plantea la presente demanda diversos elementos de juicio para proferir una decisión. Lo anterior, también en ejercicio de los poderes de ordenación e instrucción que el artículo 43<sup>5</sup> de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, le confiere a los jueces.

Atendiendo expresamente lo sostenido en el aparte antes transcrito, se procederá a citar a diferentes sectores relacionados con el régimen salarial y prestacional de los docentes, en aras de enriquecer, se insiste, el debate propio de este trámite."

De lo anteriormente expuesto, el Despacho considera necesario la suspensión del proceso hasta tanto el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa profiera una sentencia de unificación del presente tema, en aras de preservar los principios de economía procesal, seguridad y preservación del orden jurídico y efectividad de los derechos laborales, dado que en la actualidad,

<sup>3</sup> Proferido en el expediente 2483-10 con ponencia del Consejero Gómez Aranguren.

<sup>4</sup> **Artículo 103. Objeto y principios.** Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga.

Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.

<sup>5</sup> **Artículo 43. Poderes de ordenación e instrucción.** El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción:

1. Resolver los procesos en equidad si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza.
2. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta.
3. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten.
4. Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado.
5. Ratificar, por el medio más expedito posible, la autenticidad y veracidad de las excusas que presenten las partes o sus apoderados o terceros para justificar su inasistencia a audiencias o diligencias. En caso de encontrar inconsistencias o irregularidades, además de rechazar la excusa y aplicar las consecuencias legales que correspondan dentro del proceso o actuación, el juez compulsará copias para las investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar.
6. Los demás que se consagren en la ley.

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00624-01  
Actor: Gloria Cecilia Serrano

el caso similar al que en esta oportunidad es objeto de estudio, está siendo objeto de unificación en esa Corporación.

Así las cosas, el Despacho decretará de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado profiera una sentencia que unifique criterios sobre la prima de servicios de docentes.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

### RESUELVE

**PRIMERO:** Decrétese de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado, profiera sentencia de unificación de criterios, sobre la prima de servicios docentes, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ  
Magistrada



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA SECRETARIAL

Por anotación en ESTADO, notifico a las partes la providencia anterior, a las 9:00 a.m. hoy 18 DEC 2015

  
Secretario General



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
**Magistrada Ponente: Dra. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
**San José de Cúcuta, 16 DIC 2015**

Radicado : 54-001-33-33-003-2013-00680-01  
Medio de Control : **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**  
Demandante : Susana Miranda Dallos  
Demandado : Nación – Ministerio de Educación –  
Municipio de San José de Cúcuta.

Sería del caso proceder a resolver los recursos de apelación interpuesto por la apoderada parte demandante y la Procuraduría 98 Judicial Administrativa de Cúcuta, en contra de la sentencia proferida el 24 de junio de 2015 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta; si no advirtiera el Despacho que el presente expediente debe ser suspendido, conforme con lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

La demanda de la referencia fue instaurada por la señora Susana Miranda Dallos en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Municipio de San José de Cúcuta, con el objeto que se declare la nulidad del oficio 504 del 24 de Junio de 2013, mediante el cual el Subsecretario de Talento Humano niega el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

**Trámite en Primera Instancia**

El trámite de la demanda correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, quien mediante auto del 20 de febrero de 2014 admitió la presente demanda, ordenando las notificaciones de Ley (fls 108).

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
 Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00680-01  
 Actor: Susana Miranda Dallos

Surtidas las actuaciones procesales pertinentes, el A-quo, el día 24 de junio de 2015, profirió sentencia (fls 241 al 253). Dentro de la oportunidad legal, la apoderada de la parte demandante y la Procuraduría 98 Judicial Administrativa de Cúcuta, impetraron recursos de apelación en contra de la referida sentencia.

### Trámite en Segunda Instancia

Los recursos de apelación interpuestos en contra de la sentencia proferida en primera instancia fue admitido por este Tribunal, mediante auto del 16 de septiembre de 2015 (fl. 315).

Con auto del 09 de octubre de 2015 (fl. 323), y por considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procedió a correr traslado para que las partes presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

El día 17 de noviembre de 2015, pasa el expediente al Despacho para que se profiera sentencia de segunda instancia (fl. 392).

### CONSIDERACIONES

Al examinar en la página web del Consejo de Estado, el proveído del día 30 de julio de 2015 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, por el cual resolvió avocar el conocimiento del expediente radicado con el No. 15-001-33-33-010-2013-00134-01, demandante Nubia Yomar Plazas Gómez, demandado Nación – Ministerio de Educación – Departamento de Boyacá, con el objeto de proferir sentencia de unificación de jurisprudencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, precisó:

*“En el caso concreto, la solicitud del Tribunal Administrativo de Boyacá se sustenta principalmente en que el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha proferido sentencias encontradas sobre la materia.*

*En efecto, la Corporación, en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, en varias oportunidades ha señalado que las normas legales y reglamentarias que regulan lo relacionado con la administración del personal docente del país, no prevén el reconocimiento de la prima legal o de servicios, por lo que los educadores no tienen derecho a dicho beneficio, así se argumentó, por ejemplo en los fallos de 15 de junio<sup>1</sup> y 7 de diciembre<sup>2</sup> de 2011. Pero también ha dicho la Corporación, que los docentes sí son beneficiarios de la mencionada prima, pues, la Ley 91 de 1989 les hizo extensivo a los*

<sup>1</sup> Emitido en el expediente 0550-07 con ponencia de la Consejera Ramírez de Páez.

<sup>2</sup> Proferido en el expediente 2200-07 con ponencia del Consejero Luis Rafael Vergara Quintero.

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00680-01  
Actor: Susana Miranda Dallos

**educadores el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel central, para quienes el ordenamiento jurídico sí les concede la prima reclamada, así se adujo en fallo de 22 de marzo de 2012<sup>3</sup>.**

**En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la posición al interior de la Sección Segunda de esta Corporación no ha sido uniforme, se hace necesario unificar la jurisprudencia sobre la materia,** y en tal virtud, se avocará conocimiento del expediente de la referencia a fin de proferir sentencia de unificación jurisprudencial en el sub examine.

La trascendencia de la discusión que se evidencia en el presente proceso exige al Juez de lo Contencioso Administrativo, en aras de lograr la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley y la preservación del orden jurídico, en los términos del artículo 103<sup>4</sup> de la Ley 1437 de 2011, y en clara consonancia con su rol de garante en el marco del proceso y conductor del mismo, vincular a personas jurídicas que, con criterios calificados, puedan aportar a la discusión que plantea la presente demanda diversos elementos de juicio para proferir una decisión. Lo anterior, también en ejercicio de los poderes de ordenación e instrucción que el artículo 43<sup>5</sup> de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, le confiere a los jueces.

Atendiendo expresamente lo sostenido en el aparte antes transcrito, se procederá a citar a diferentes sectores relacionados con el régimen salarial y prestacional de los docentes, en aras de enriquecer, se insiste, el debate propio de este trámite."

De lo anteriormente expuesto, el Despacho considera necesario la suspensión del proceso hasta tanto el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa profiera una sentencia de unificación del presente tema, en aras de preservar los principios de economía procesal, seguridad y preservación del orden jurídico y efectividad de los derechos laborales, dado que en la actualidad,

<sup>3</sup> Proferido en el expediente 2483-10 con ponencia del Consejero Gómez Aranguren.

<sup>4</sup> **Artículo 103. Objeto y principios.** Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga.

Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.

<sup>5</sup> **Artículo 43. Poderes de ordenación e instrucción.** El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción:

1. Resolver los procesos en equidad si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza.
2. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta.
3. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten.
4. Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado.
5. Ratificar, por el medio más expedito posible, la autenticidad y veracidad de las excusas que presenten las partes o sus apoderados o terceros para justificar su inasistencia a audiencias o diligencias. En caso de encontrar inconsistencias o irregularidades, además de rechazar la excusa y aplicar las consecuencias legales que correspondan dentro del proceso o actuación, el juez compulsará copias para las investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar.
6. Los demás que se consagren en la ley.



Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00680-01  
Actor: Susana Miranda Dallos

el caso similar al que en esta oportunidad es objeto de estudio, está siendo objeto de unificación en esa Corporación.

Así las cosas, el Despacho decretará de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado profiera una sentencia que unifique criterios sobre la prima de servicios de docentes.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

### RESUELVE

**PRIMERO:** Decrétese de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado, profiera sentencia de unificación de criterios, sobre la prima de servicios docentes, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ  
Magistrada



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA SECRETARIAL

Por anotación en ESTADO, notifíco a las  
partes la providencia anterior, a las 5:00 a.m.  
hoy 13 DEC 2015

  
Secretario General



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
**Magistrada Ponente: Dra. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
**San José de Cúcuta, 16 DIC 2015**

Radicado : 54-001-33-33-003-2013-00700-01  
 Medio de Control : **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**  
 Demandante : Margarita Tarazona García  
 Demandado : Nación – Ministerio de Educación –  
 Municipio de San José de Cúcuta.

Sería del caso proceder a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada parte demandante en contra de la sentencia proferida el 07 de julio de 2015 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta; si no advirtiera el Despacho que el presente expediente debe ser suspendido, conforme con lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

La demanda de la referencia fue instaurada por la señora Margarita Tarazona García en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Municipio de San José de Cúcuta, con el objeto que se declare la nulidad del oficio 504 del 24 de Junio de 2013, mediante el cual el Subsecretario de Talento Humano niega el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

**Trámite en Primera Instancia**

El trámite de la demanda correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, quien mediante auto del 20 de febrero de 2014 avocó conocimiento y admitió la presente demanda, ordenando las notificaciones de Ley. (Fls 66).

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-003-2013-00700-01  
Actor: Margarita Tarazona García

Surtidas las actuaciones procesales pertinentes, el A-quo, el día 07 de julio de 2015, profirió sentencia (fls 184 al 188). Dentro de la oportunidad legal, la apoderada de la parte demandante, impetró recurso de apelación en contra de la referida sentencia.

### Trámite en Segunda Instancia

El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida en primera instancia fue admitido por este Tribunal, mediante auto del 23 de septiembre de 2015 (fl. 242).

Con auto del 21 de octubre de 2015 (fl. 251), y por considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procedió a correr traslado para que las partes presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

El día 26 de noviembre de 2015, pasa el expediente al Despacho para que se profiera sentencia de segunda instancia (fl. 325).

### CONSIDERACIONES

Al examinar en la página web del Consejo de Estado, el proveído del día 30 de julio de 2015 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, por el cual resolvió avocar el conocimiento del expediente radicado con el No. 15-001-33-33-010-2013-00134-01, demandante Nubia Yomar Plazas Gómez, demandado Nación – Ministerio de Educación – Departamento de Boyacá, con el objeto de proferir sentencia de unificación de jurisprudencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, precisó:

*“En el caso concreto, la solicitud del Tribunal Administrativo de Boyacá se sustenta principalmente en que el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha proferido sentencias encontradas sobre la materia.*

***En efecto, la Corporación, en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, en varias oportunidades ha señalado que las normas legales y reglamentarias que regulan lo relacionado con la administración del personal docente del país, no prevén el reconocimiento de la prima legal o de servicios, por lo que los educadores no tienen derecho a dicho beneficio, así se argumentó, por ejemplo en los fallos de 15 de junio<sup>1</sup> y 7 de diciembre<sup>2</sup> de 2011. Pero también ha dicho la Corporación, que los docentes sí son beneficiarios de la mencionada***

<sup>1</sup> Emitido en el expediente 0550-07 con ponencia de la Consejera Ramírez de Páez.

<sup>2</sup> Proferido en el expediente 2200-07 con ponencia del Consejero Luis Rafael Vergara Quintero.

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-003-2013-00700-01  
Actor: Margarita Tarazona García

**prima, pues, la Ley 91 de 1989 les hizo extensivo a los educadores el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel central, para quienes el ordenamiento jurídico sí les concede la prima reclamada, así se adujo en fallo de 22 de marzo de 2012<sup>3</sup>.**

**En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la posición al interior de la Sección Segunda de esta Corporación no ha sido uniforme, se hace necesario unificar la jurisprudencia sobre la materia,** y en tal virtud, se avocará conocimiento del expediente de la referencia a fin de proferir sentencia de unificación jurisprudencial en el sub examine.

La trascendencia de la discusión que se evidencia en el presente proceso exige al Juez de lo Contencioso Administrativo, en aras de lograr la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley y la preservación del orden jurídico, en los términos del artículo 103<sup>4</sup> de la Ley 1437 de 2011, y en clara consonancia con su rol de garante en el marco del proceso y conductor del mismo, vincular a personas jurídicas que, con criterios calificados, puedan aportar a la discusión que plantea la presente demanda diversos elementos de juicio para proferir una decisión. Lo anterior, también en ejercicio de los poderes de ordenación e instrucción que el artículo 43<sup>5</sup> de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, le confiere a los jueces.

Atendiendo expresamente lo sostenido en el aparte antes transcrito, se procederá a citar a diferentes sectores relacionados con el régimen salarial y prestacional de los docentes, en aras de enriquecer, se insiste, el debate propio de este trámite."

De lo anteriormente expuesto, el Despacho considera necesario la suspensión del proceso hasta tanto el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa profiera una sentencia de unificación del presente tema, en aras de preservar los principios de economía procesal, seguridad y preservación del orden jurídico y efectividad de los derechos laborales, dado que en la actualidad,

<sup>3</sup> Proferido en el expediente 2483-10 con ponencia del Consejero Gómez Aranguren.

<sup>4</sup> **Artículo 103. Objeto y principios.** Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga.

Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.

<sup>5</sup> **Artículo 43. Poderes de ordenación e instrucción.** El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción:

1. Resolver los procesos en equidad si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza.
2. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta.
3. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten.
4. Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado.
5. Ratificar, por el medio más expedito posible, la autenticidad y veracidad de las excusas que presenten las partes o sus apoderados o terceros para justificar su inasistencia a audiencias o diligencias. En caso de encontrar inconsistencias o irregularidades, además de rechazar la excusa y aplicar las consecuencias legales que correspondan dentro del proceso o actuación, el juez compulsará copias para las investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar.
6. Los demás que se consagren en la ley.

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-003-2013-00700-01  
Actor: Margarita Tarazona García

el caso similar al que en esta oportunidad es objeto de estudio, está siendo objeto de unificación en esa Corporación.

Así las cosas, el Despacho decretará de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado profiera una sentencia que unifique criterios sobre la prima de servicios de docentes.

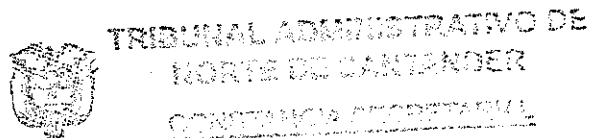
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

### RESUELVE

**PRIMERO:** Decrétese de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado, profiera sentencia de unificación de criterios, sobre la prima de servicios docentes, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ  
Magistrada



Por anotación en ESTADO, notifíco a las  
partes la providencia anterior, a las 8:00 a.m.  
hoy 11 DE DEC 2015

  
Secretario General



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
**Magistrada Ponente: Dra. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
**San José de Cúcuta, 16 DIC 2015**

Radicado : 54-001-33-33-002-2013-00783-01  
Medio de Control : **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**  
Demandante : Pascual Antonio Rojas Urbina  
Demandado : Nación – Ministerio de Educación –  
Municipio de San José de Cúcuta.

Sería del caso proceder a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 30 de junio de 2015 por el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Cúcuta; si no advirtiera el Despacho que el presente expediente debe ser suspendido de oficio, conforme con lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

La demanda de la referencia fue instaurada por el señor Pascual Antonio Rojas Urbina en contra de Nación – Ministerio de Educación – Municipio de San José de Cúcuta, con el objeto que se declare la nulidad del oficio 504 del 02 de Julio de 2013, mediante el cual el Secretario de Despacho Área Dirección Educativa niega el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

**Trámite en Primera Instancia**

El trámite de la demanda correspondió al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta quien mediante providencia del 06 de marzo de 2014, avocó conocimiento y admitió la demanda, ordenando las notificaciones de Ley (fl. 62 y 63).

*Auto Decreta Suspensión Del Proceso*  
*Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00783-01*  
*Actor: Pascual Antonio Rojas Urbina*

Surtidas las actuaciones procesales pertinentes, el A-quo, el día 30 de junio de 2015, profirió sentencia (fls 166 al 168). Dentro de la oportunidad legal, la apoderada de la parte demandante, impetró recurso de apelación en contra de la referida sentencia.

### **Trámite en Segunda Instancia**

El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida en primera instancia fue admitido por este Tribunal, mediante auto del 10 de septiembre de 2015 (fl. 227).

Con auto del 09 de octubre de 2015 (fl. 235), y por considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procedió a correr traslado para que las partes presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

El día 19 de noviembre de 2015, pasa el expediente al Despacho para que se profiera sentencia de segunda instancia (fl.324).

### **CONSIDERACIONES**

Al examinar en la página web del Consejo de Estado, el proveído del día 30 de julio de 2015 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, por el cual resolvió avocar el conocimiento del expediente radicado con el No. 15-001-33-33-010-2013-00134-01, demandante Nubia Yomar Plazas Gómez, demandado Nación – Ministerio de Educación – Departamento de Boyacá, con el objeto de proferir sentencia de unificación de jurisprudencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, precisó:

*“En el caso concreto, la solicitud del Tribunal Administrativo de Boyacá se sustenta principalmente en que el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha proferido sentencias encontradas sobre la materia.*

***En efecto, la Corporación, en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, en varias oportunidades ha señalado que las normas legales y reglamentarias que regulan lo relacionado con la administración del personal docente del país, no prevén el reconocimiento de la prima legal o de servicios, por lo que los educadores no tienen derecho a dicho beneficio, así se argumentó, por ejemplo en los fallos de 15 de junio<sup>1</sup> y 7 de diciembre<sup>2</sup> de 2011. Pero también ha dicho la Corporación, que los docentes sí son beneficiarios***

<sup>1</sup> Emitido en el expediente 0550-07 con ponencia de la Consejera Ramírez de Páez.

<sup>2</sup> Proferido en el expediente 2200-07 con ponencia del Consejero Luis Rafael Vergara Quintero.

de la mencionada prima, pues, la Ley 91 de 1989 les hizo extensivo a los educadores el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel central, para quienes el ordenamiento jurídico sí les concede la prima reclamada, así se adujo en fallo de 22 de marzo de 2012<sup>3</sup>.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la posición al interior de la Sección Segunda de esta Corporación no ha sido uniforme, se hace necesario unificar la jurisprudencia sobre la materia, y en tal virtud, se avocará conocimiento del expediente de la referencia a fin de proferir sentencia de unificación jurisprudencial en el sub examine.

La trascendencia de la discusión que se evidencia en el presente proceso exige al Juez de lo Contencioso Administrativo, en aras de lograr la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley y la preservación del orden jurídico, en los términos del artículo 103<sup>4</sup> de la Ley 1437 de 2011, y en clara consonancia con su rol de garante en el marco del proceso y conductor del mismo, vincular a personas jurídicas que, con criterios calificados, puedan aportar a la discusión que plantea la presente demanda diversos elementos de juicio para proferir una decisión. Lo anterior, también en ejercicio de los poderes de ordenación e instrucción que el artículo 43<sup>5</sup> de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, le confiere a los jueces.

Atendiendo expresamente lo sostenido en el aparte antes transcrito, se procederá a citar a diferentes sectores relacionados con el régimen salarial y prestacional de los docentes, en aras de enriquecer, se insiste, el debate propio de este trámite."

De lo anteriormente expuesto, el Despacho considera necesario la suspensión del proceso hasta tanto el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa profiera una sentencia de unificación del presente tema, en aras de preservar los principios de economía procesal, seguridad y preservación del orden jurídico y efectividad de los derechos laborales, dado que en la actualidad,

<sup>3</sup> Proferido en el expediente 2483-10 con ponencia del Consejero Gómez Aranguren.

<sup>4</sup> **Artículo 103. Objeto y principios.** Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga.

Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.

<sup>5</sup> **Artículo 43. Poderes de ordenación e instrucción.** El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción:

1. Resolver los procesos en equidad si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza.
2. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta.
3. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten.
4. Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado.
5. Ratificar, por el medio más expedito posible, la autenticidad y veracidad de las excusas que presenten las partes o sus apoderados o terceros para justificar su inasistencia a audiencias o diligencias. En caso de encontrar inconsistencias o irregularidades, además de rechazar la excusa y aplicar las consecuencias legales que correspondan dentro del proceso o actuación, el juez compulsará copias para las investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar.
6. Los demás que se consagren en la ley.



Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-002-2013-00783-01  
Actor: Pascual Antonio Rojas Urbina

el caso similar al que en esta oportunidad es objeto de estudio, está siendo objeto de unificación en esa Corporación.

Así las cosas, el Despacho decretará de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado profiera una sentencia que unifique criterios sobre la prima de servicios de docentes.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

### RESUELVE

**PRIMERO:** Decrétese de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado, profiera sentencia de unificación de criterios, sobre la prima de servicios docentes, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia..

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

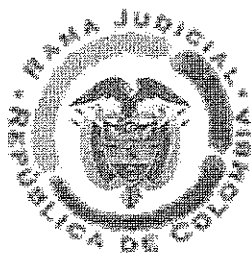
  
MARIBEL MENDOXA JIMÉNEZ  
Magistrada



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA SECRETARIAL

Por anotación en ESTADO, notifíco a las  
partes la providencia anterior, a las 8:00 a.m.  
hoy 16 DEC 2015

  
Secretario General



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
**Magistrada Ponente: Dra. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
**San José de Cúcuta, 16 DIC 2015**

Radicado : 54-001-33-33-001-2014-00049-01  
 Medio de Control : **Nulidad y Restablecimiento del Derecho**  
 Demandante : Marleny Cifuentes Moreno  
 Demandado : Nación – Ministerio de Educación –  
 Fondo Nacional de Prestaciones Sociales  
 Del Magisterio – Departamento Norte de Santander

Sería del caso proceder a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 31 de julio de 2015 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del circuito Judicial de Pamplona; si no advirtiera el Despacho que el presente expediente debe ser suspendido de oficio, conforme con lo siguiente:

**ANTECEDENTES**

La demanda de la referencia fue instaurada por la señora Marleny Cifuentes Moreno en contra de Nación – Ministerio de Educación –Fondo Nacional de Prestaciones sociales del Magisterio-Departamento Norte de Santander, con el objeto que se declare la nulidad del oficio 7000.7040.39 del 24 de Junio de 2013, mediante el cual la secretaria de Educación Departamental, niega el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

Que como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se ordene el reconocimiento y pago de la prima de servicios, incremento de antigüedad, la bonificación por servicios prestados, y la bonificación por recreación.

**Trámite en Primera Instancia**

El trámite de la demanda correspondió al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Pamplona, quien mediante providencia del 30 de abril del 2014, admitió la demanda, ordenando las notificaciones de Ley (fl. 116).

*Auto Decreta Suspensión Del Proceso*  
*Rad.: 54-001-33-33-001-2014-00049-01*  
*Actor: Marleny Cifuentes Moreno*

Surtidas las actuaciones procesales pertinentes, el A-quo, el día 31 de julio de 2015, profirió sentencia (fls 205 a 214). Dentro de la oportunidad legal, la apoderada de la parte demandante, impetró recurso de apelación en contra de la referida sentencia.

### **Trámite en Segunda Instancia**

El recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida en primera instancia fue admitido por este Tribunal, mediante auto del 16 de septiembre de 2015 (fl. 274).

Con auto del 09 de octubre de 2015 (fl. 282), y por considerar innecesaria la audiencia de alegaciones y juzgamiento, de conformidad con lo previsto en el numeral 4º del artículo 247 del CPACA, se procedió a correr traslado para que las partes presentaran por escrito sus alegatos de conclusión.

El día 19 de noviembre de 2015, pasa el expediente al Despacho para que se profiera sentencia de segunda instancia (fl.360).

### **CONSIDERACIONES**

Al examinar en la página web del Consejo de Estado, el proveído del día 30 de julio de 2015 proferido por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez, por el cual resolvió avocar el conocimiento del expediente radicado con el No. 15-001-33-33-010-2013-00134-01, demandante Nubia Yomar Plazas Gómez, demandado Nación – Ministerio de Educación – Departamento de Boyacá, con el objeto de proferir sentencia de unificación de jurisprudencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, precisó:

*“En el caso concreto, la solicitud del Tribunal Administrativo de Boyacá se sustenta principalmente en que el Consejo de Estado, Sección Segunda, ha proferido sentencias encontradas sobre la materia.*

*En efecto, la Corporación, en su Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, en varias oportunidades ha señalado que las normas legales y reglamentarias que regulan lo relacionado con la administración del personal docente del país, no prevén el reconocimiento de la prima legal o de servicios, por lo que los educadores no tienen derecho a dicho beneficio, así se argumentó, por ejemplo en los fallos de 15 de junio<sup>1</sup> y 7 de diciembre<sup>2</sup> de 2011. Pero también ha dicho la Corporación, que los docentes sí son beneficiarios de la mencionada prima, pues, la Ley 91 de 1989 les hizo extensivo a los*

<sup>1</sup> Emitido en el expediente 0550-07 con ponencia de la Consejera Ramírez de Páez.

<sup>2</sup> Proferido en el expediente 2200-07 con ponencia del Consejero Luis Rafael Vergara Quintero.

educadores el régimen prestacional de los empleados públicos del nivel central, para quienes el ordenamiento jurídico sí les concede la prima reclamada, así se adujo en fallo de 22 de marzo de 2012<sup>3</sup>.

En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que la posición al interior de la Sección Segunda de esta Corporación no ha sido uniforme, se hace necesario unificar la jurisprudencia sobre la materia, y en tal virtud, se avocará conocimiento del expediente de la referencia a fin de proferir sentencia de unificación jurisprudencial en el sub examine.

La trascendencia de la discusión que se evidencia en el presente proceso exige al Juez de lo Contencioso Administrativo, en aras de lograr la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución y en la Ley y la preservación del orden jurídico, en los términos del artículo 103<sup>4</sup> de la Ley 1437 de 2011, y en clara consonancia con su rol de garante en el marco del proceso y conductor del mismo, vincular a personas jurídicas que, con criterios calificados, puedan aportar a la discusión que plantea la presente demanda diversos elementos de juicio para proferir una decisión. Lo anterior, también en ejercicio de los poderes de ordenación e instrucción que el artículo 43<sup>5</sup> de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, le confiere a los jueces.

Atendiendo expresamente lo sostenido en el aparte antes transcrito, se procederá a citar a diferentes sectores relacionados con el régimen salarial y prestacional de los docentes, en aras de enriquecer, se insiste, el debate propio de este trámite."

De lo anteriormente expuesto, el Despacho considera necesario la suspensión del proceso hasta tanto el máximo órgano de la jurisdicción contencioso administrativa profiera una sentencia de unificación del presente tema, en aras de preservar los principios de economía procesal, seguridad y preservación del orden jurídico y efectividad de los derechos laborales, dado que en la actualidad,

<sup>3</sup> Proferido en el expediente 2483-10 con ponencia del Consejero Gómez Aranguren.

<sup>4</sup> **Artículo 103. Objeto y principios.** Los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tienen por objeto la efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución Política y la ley y la preservación del orden jurídico.

En la aplicación e interpretación de las normas de este Código deberán observarse los principios constitucionales y los del derecho procesal.

En virtud del principio de igualdad, todo cambio de la jurisprudencia sobre el alcance y contenido de la norma, debe ser expresa y suficientemente explicado y motivado en la providencia que lo contenga.

Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código.

<sup>5</sup> **Artículo 43. Poderes de ordenación e instrucción.** El juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción:

1. Resolver los procesos en equidad si versan sobre derechos disponibles, las partes lo solicitan y son capaces, o la ley lo autoriza.
2. Rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente o que implique una dilación manifiesta.
3. Ordenar a las partes aclaraciones y explicaciones en torno a las posiciones y peticiones que presenten.
4. Exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado.
5. Ratificar, por el medio más expedito posible, la autenticidad y veracidad de las excusas que presenten las partes o sus apoderados o terceros para justificar su inasistencia a audiencias o diligencias. En caso de encontrar inconsistencias o irregularidades, además de rechazar la excusa y aplicar las consecuencias legales que correspondan dentro del proceso o actuación, el juez compulsará copias para las investigaciones penales o disciplinarias a que haya lugar.
6. Los demás que se consagren en la ley.

Auto Decreta Suspensión Del Proceso  
Rad.: 54-001-33-33-001-2014-00049-01  
Actor: Marleny Cifuentes Moreno

el caso similar al que en esta oportunidad es objeto de estudio, está siendo objeto de unificación en esa Corporación.

Así las cosas, el Despacho decretará de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado profiera una sentencia que unifique criterios sobre la prima de servicios de docentes.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

### RESUELVE

**PRIMERO:** Decrétese de oficio la suspensión del presente proceso, hasta tanto la Sección Segunda del Consejo de Estado, profiera sentencia de unificación de criterios, sobre la prima de servicios docentes, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

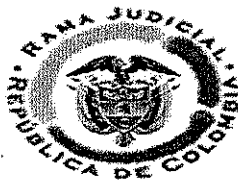
  
MARIBEL MENDOZA JIMENEZ  
Magistrada



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA SECRETARIAL

Por anotación en ESTADO, notifico a las  
partes la providencia anterior, a las 8:03 a.m  
hoy 19 DEC 2015

  
Secretario General

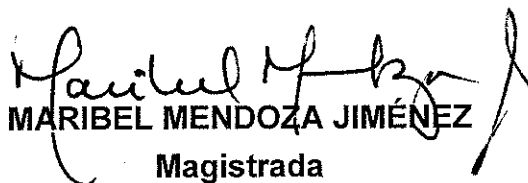


**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
**Magistrada Sustanciadora: Dra. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
**San José de Cúcuta, catorce (14) de diciembre del dos mil quince (2015)**

**Radicado:** 54-001-23-33-000-2014-00243-00 Acumulado  
54-001-23-33-000-2014-00269-00  
**Accionante:** C.I. Logística de Exportación Ltda.  
**Accionado:** NACIÓN- U.A.E. de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN  
**Medio de control:** Nulidad y restablecimiento del derecho

Como quiera que la audiencia inicial que se encontraba prevista para el día 24 de noviembre de 2015 no se realizó, en consecuencia, **CÍTESE** nuevamente a las partes, al Ministerio Público y demás intervinientes a la citada audiencia para el día 12 de abril de 2016 a las 03:00 p.m.


**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
**Magistrada**



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER**  
**CONSTANCIA SECRETARIAL**

Por anotación en ESTADO, notifico a las partes la providencia anterior, a las 8:00 a.m. hoy 19 8 DEC 2015

  
**Secretario General**



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
**Magistrada Ponente: Dra. MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
 San José de Cúcuta, 11 DIC 2015

**Radicado : 54-518-33-33-001-2015-00172-02**  
**Actor : José Ricardo Hernández Gómez**  
**Demandado : Concejo Municipal de Chinácota – ILICH JAMAT JESSET HERNÁNDEZ GÓMEZ**

**Medio de Control: Nulidad Electoral**

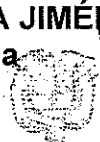
De conformidad con el numeral 1º del artículo 293 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **ADMÍTASE** el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del Concejo Municipal de Chinácota y por el apoderado del señor ILICH JAMAT JESSET HERNÁNDEZ GÓMEZ contra la sentencia de fecha treinta (30) de noviembre de dos mil quince (2015), proferida por el Juzgado Primero Administrativo Oral de Pamplona, que declaró la nulidad del acto de elección del señor ILICH JAMAT JESSET HERNÁNDEZ GÓMEZ como Personero Municipal de Chinácota.

Igualmente, en la forma indicada en el inciso 1º del artículo 293 ibídem, **CÓRRASE TRASLADO** a cada una de las partes para alegar de conclusión por el término de tres (03) días. Una vez vencido el término anterior el Agente del Ministerio Público previa entrega entrega del expediente deberá emitir su concepto dentro de los cinco (5) días siguientes.

Una vez ejecutoriado el presente proveído ingrésese el presente expediente al Despacho para decidir lo que corresponda.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
 Magistrada

  
 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
 NORTE DE SANTANDER  
 CONSTANCIA SECRETARIAL

Por anotación en ESTADO, notifico a las partes la providencia anterior, a las 8:00 a.m.  
 hoy 18 DEC 2015

  
 Secretario General



## TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015)

**Radicado N°:** 54-001-23-33-000-2015-00336-00  
**Demandante:** HAIR ARLEX GONZÁLEZ GONZÁLEZ  
**Demandados:** INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC-  
**Medio de Control:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

Sería del caso proceder a admitir el presente medio de control, si no se observara que las falencias advertidas mediante auto de fecha 13 de noviembre de 2015<sup>1</sup>, no fueron corregidas dentro del término otorgado para el efecto; razón por la cual se rechazará la presente demanda de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 169 de la Ley 1437 de 2011, por lo tanto se ordenará la devolución de la demanda y sus anexos.

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

### RESUELVE:

**PRIMERO: RECHAZAR LA DEMANDA** presentada por el señor **HAIR ARLEX GONZÁLEZ GONZÁLEZ** contra el **INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC-**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.

**SEGUNDO: DEVUÉLVASE** la demanda y sus anexos.

### NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

(Discutido y aprobado en Sala de Decisión N° 1 del 16 de diciembre de 2015)

  
**EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI**  
Magistrado

  
**MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
Magistrada


  
**CARLOS MARIO PEÑA DÍAZ**  
Magistrado



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA SECRETARIAL

<sup>1</sup> Folio 39 del expediente.

Por anotación en ESTADO, notifico a las partes la providencia anterior, a las 3:00 a.m.  
hoy 18 DEC 2015

  
Secretario General





## **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO NORTE DE SANTANDER**

Magistrado Sustanciadora: Maribel Mendoza Jiménez  
San José de Cúcuta, dieciséis (16) de diciembre del dos mil quince (2015)

**Radicado:** 54-001-23-33-000-2015-00394-00  
**Peticionario:** Claudia Anyeli Bayona Ortiz  
**Entidad:** Departamento Norte de Santander  
**Medio de Control:** Ejecutivo

Procede la Sala Plena del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, a decidir el conflicto negativo de competencias suscitado entre el Juzgado Primero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Cúcuta y el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, dentro del proceso ejecutivo propuesto por la señora Claudia Anyeli Bayona Ortiz en contra del Departamento Norte de Santander.

### **I. ANTECEDENTES**

El día 25 de julio de 2013 el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Cúcuta, profirió sentencia dentro del proceso radicado No. 54-001-33-31-701-2011-00088-00, demandante: Claudia Anyeli Bayona Ortiz, demandado: Departamento Norte de Santander, mediante la cual se declaró de oficio la excepción de prescripción de las acreencias laborales y como consecuencia la negativa de las súplicas de la demanda (folios 13 al 18v del expediente).

Posteriormente, mediante sentencia de segunda instancia de fecha 27 de septiembre de 2013, la Sala Escritural de esta Corporación decidió revocar la sentencia de primera instancia y acceder parcialmente a las súplicas de la demanda (folios 19 al 25v del expediente).

En vista del incumplimiento a la citada orden judicial por la entidad demandada, la señora Omaira Casanova Sandoval presenta el 28 de julio de 2015, proceso ejecutivo en contra del Municipio de San José de Cúcuta, el cual por reparto correspondió al Juzgado Sexto Administrativo Oral de Cúcuta (folio 27).

El precitado Despacho mediante auto de fecha 30 de septiembre de 2015 (fl. 29), estimó que debía declararse sin competencia para conocer del presente asunto,

**Radicado:** 54-001-23-33-000-2015-00394-00

**Actor:** Claudia Anyeli Bayona Ortiz

**Auto**

toda vez que no fue quien profirió la sentencia objeto de demanda, considerando que en su lugar, le corresponde al Juzgado Primero Administrativo Oral de Descongestión de Cúcuta, adelantar el trámite suscitado.

Por su parte, a través de auto de fecha 12 de noviembre de 2015 (fls. 33-34), concluyó la Juez Primero Administrativo Oral de Descongestión de Cúcuta, que había lugar a proponer el presente conflicto de competencia, toda vez que en principio el proceso ejecutivo de sentencias de condenas proferidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa, debe tramitarse ante el mismo juez que profirió la sentencia, sin embargo, no puede a su parecer, dejarse de lado las condiciones a las cuales está sometido ese despacho judicial, en cumplimiento al Plan de Descongestión en el sistema oral establecido por el mismo Consejo Superior de la Judicatura.

## **2. CONSIDERACIONES DE LA SALA**

### **2.1.- Competencia**

La Sala Plena de este Tribunal es competente para decidir el presente conflicto de competencias suscitado entre el Juzgado Primero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Cúcuta y el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 158 de la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, que establece que si el conflicto se presenta entre jueces administrativos de un mismo distrito judicial, este será decidido por el Tribunal Administrativo respectivo.

En igual sentido, el artículo 123º ibídem al referirse a las funciones de la Sala Plena de los Tribunales Administrativos, señala:

***“Artículo 123. Sala Plena. La Sala Plena de los Tribunales Administrativos ejercerá las siguientes funciones:***

*(...)*

*4. Dirimir los conflictos de competencias que surjan entre las secciones o subsecciones del mismo tribunal y aquellos que se susciten entre dos jueces administrativos del mismo distrito. (...)*

**Radicado:** 54-001-23-33-000-2015-00394-00

**Actor:** Claudia Anyeli Bayona Ortiz

**Auto**

## 2.2.- El Problema jurídico

Le corresponde a la Sala Plena determinar, ¿cuál es el juzgado competente para conocer del proceso ejecutivo en el caso concreto: sí es el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta o por el contrario, el competente es el Juzgado Primero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Cúcuta?

## 3.- DECISIÓN

La Sala Plena de esta Corporación Judicial estima que el competente para conocer del proceso de la referencia es el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, con fundamento en lo siguiente:

En el sub examine, se solicita se libre mandamiento de pago a favor de la señora CLAUDIA ANYELI BAYONA ORTIZ y en contra de la entidad demandada, por las sumas de dinero que resulten de las condenas impuestas por la Sentencia dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 54-001-33-31-701-2011-00088-01 proferida por esta Corporación, el día 27 de septiembre de 2013 (folio 6).

En orden de ideas, la Ley fija la competencia de los distintos Jueces y Tribunales de la República para las diversas clases de negocios, atendiendo, entre otros, al factor funcional, objetivo, subjetivo y territorial, esto es, a su naturaleza, a las pretensiones, a la calidad de las partes y al lugar donde debe ventilarse el proceso.

En primer lugar, los artículos 297 y 298 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regulan los requisitos, trámite, procedimiento y competencia de los Procesos Ejecutivos, así:

*“Artículo 297. Título ejecutivo. Para los efectos de este código, constituyen título ejecutivo:*

*1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.*  
*(...)”*

*“Artículo 298. Procedimiento: En los casos a que se refiere el numeral 1° del artículo anterior, si transcurrió un (1) año desde la ejecutoria de la sentencia*

**Radicado:** 54-001-23-33-000-2015-00394-00

**Actor:** Claudia Anyeli Bayona Ortiz

**Auto**

condenatoria o de la fecha que ella señale, esta no se ha pagado, sin excepción alguna el juez que la profirió ordenará su cumplimiento inmediato.  
(Se subraya)

(...)”

En este orden, respecto de la competencia de los Jueces Administrativos para conocer los procesos ejecutivos, el numeral 7° del artículo 155° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prescribe lo siguiente en su tenor literal:

**ARTÍCULO 155. COMPETENCIA DE LOS JUECES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA.** Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:

(...)

7. De los procesos ejecutivos, cuando la cuantía no exceda de mil quinientos (1500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (...)

Seguidamente, en lo que respecta al medio de control ejecutivo en razón al factor territorial, se tiene que el mismo fue regulado por el numeral 9° del artículo 156 del C.P.A.C.A., de la siguiente manera:

**“ARTÍCULO 156. COMPETENCIA POR RAZÓN DEL TERRITORIO.** Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observarán las siguientes reglas:

(...)

9. En las ejecuciones de las condenas impuestas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo o de las obligaciones contenidas en una conciliación aprobada por esta jurisdicción, será competente el juez que profirió la providencia respectiva.”

A efectos de dilucidar la interpretación que debe darse a tal normativa para lo que nos compete en esta ocasión, cabe referir la ilustración planteada por la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia de fecha siete (07) de octubre de 2014, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación: 47-001-23-33-000-2013-00224-01(50006), en la cual se expuso lo siguiente:

“De la interpretación taxativa de la norma anterior, se puede llegar a pensar que existe una contradicción entre las normas de competencia previamente citadas, pues la norma que otorga competencia en razón del territorio, pareciera indicar que el juez competente es el mismo que profirió la condena,

**Radicado:** 54-001-23-33-000-2015-00394-00

**Actor:** Claudia Anyeli Bayona Ortiz

**Auto**

*independientemente de cual sea la cuantía del asunto, siendo indiferente entonces analizar el factor objetivo.*

*Sin embargo, encuentra esta Corporación que es necesario armonizar las normas ya referenciadas, y entender que cuando el artículo 156 numeral 9° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dice que será competente el mismo juez que profirió la sentencia respectiva, dicha norma se ve limitada por el encabezado de la misma, razón por la cual tan imperativa se circunscribe a determinar solamente la competencia en razón del territorio, por tal motivo se debe entender entonces que no hace referencia al juez propiamente dicho, sino al distrito judicial donde se debe interponer la demanda ejecutiva.*

*Siendo así, el factor objetivo resulta indispensable para determinar el juez competente, pues solo al determinar la cuantía es posible identificar el funcionario del distrito judicial que le corresponde conocer del proceso ejecutivo, siendo necesario entonces aplicar las dos normas anteriormente mencionadas, que consagran el factor objetivo y el factor territorial de manera armónica y sistemática, para dar con el juez competente cuando el título ejecutivo consiste en una sentencia judicial."*

Bajo el anterior derrotero que además es claro en determinar que la interpretación de la normativa que regula la materia de la competencia para el conocimiento de las demandas ejecutivas, no resulta delimitada a considerar que el competente para tramitar tales asuntos sea el juez que profirió directamente la sentencia, sino al distrito judicial en sí.

Comparte este Tribunal el criterio consistente en que la delimitación del artículo 156 numeral 9° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no hace estricta referencia al juez que profirió la decisión judicial que motiva la interposición del proceso ejecutivo, sino al distrito judicial donde se debe interponer la demanda ejecutiva.

Así las cosas, se concluye, que dadas las directrices sobre competencia plasmadas recientemente, la competencia en primera instancia para conocer del proceso bajo estudio, radica en los Jueces Administrativos de Cúcuta, previo reparto, advirtiéndose que habida cuenta que tal actuación se surtió (fl. 27), es claro que quien deberá asumir el conocimiento en primera instancia del asunto de la referencia, es el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en Sala Plena,

**Radicado:** 54-001-23-33-000-2015-00394-00

**Actor:** Claudia Anyeli Bayona Ortiz

**Auto**

**RESUELVE:**

**PRIMERO:** **DIRIMIR** el conflicto negativo de competencia generado entre el Juzgado Primero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Cúcuta y el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Cúcuta, declarando competente al **JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA**, para conocer del proceso ejecutivo promovido por la señora Claudia Anyeli Bayona Ortiz en contra del Departamento de Norte de Santander, conforme a lo expuesto en la consideraciones que anteceden.

**SEGUNDO:** En consecuencia **REMÍTASE** el asunto al **JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CÚCUTA** para lo de su competencia y envíese copia de esta providencia al Juzgado Primero Administrativo Oral de Descongestión del Circuito de Cúcuta para su información.

**TERCERO:** En firme esta providencia, **ARCHÍVESE** previa las anotaciones secretariales de rigor.

**Discutido y aprobado en Sala Plena del dieciséis (16) de diciembre de 2015.**

  
MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ  
Magistrada

  
EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI  
Magistrado

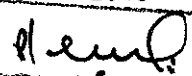
  
BEATRIZ HELENA ESCOBAR ROJAS  
Magistrada

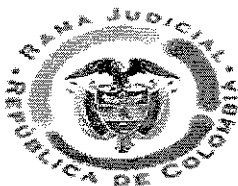
  
MARÍA JOSEFINA IBARRA RODRÍGUEZ  
Magistrada

  
CARLOS MARIO PEÑA DÍAZ  
Magistrado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA SECRETARIAL

18 DEC 2015





A1

**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
San José de Cúcuta, dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015)

**Radicado N°:** 54-001-23-33-000-2015-00405-00  
**Demandante:** EDWIN GIOVANI HERNÁNDEZ GARCÍA  
**Demandados:** MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL  
**Medio de Control:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Encontrándose nuevamente el proceso al Despacho sustanciador para proveer sobre la admisión de la misma, una vez vencido el término legal para la corrección de la demanda ordenado mediante auto del 19 de noviembre hogañ, y ante la presentación de los documentos con los cuales se corrigen los yerros advertidos, es menester hacer la siguiente precisión:

Los actos administrativos demandados corresponden a los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos el 30 de mayo de 2014 y el 27 de agosto de 2014 por el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Cúcuta y el Inspector Delegado Región Cinco de Policía respectivamente, por medio de los cuales se decidió sancionar disciplinariamente al patrullero EDWIN GIOVANI HERNÁNDEZ GARCIA con SUSPENSIÓN E INHABILIDAD ESPECIAL DE SEIS (6) MESES, SIN DERECHO A REMUNERACIÓN.

De la misma forma, demanda la nulidad de la Resolución N° 003692 del 11 de septiembre de 2014, proferida por el Director General de la Policía Nacional, por medio de la cual suspende en el ejercicio del cargo y funciones por el término de 6 meses al Patrullero Hernández García.

Respecto a éste último acto administrativo demandado, se tiene que en virtud de lo señalado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, los actos de ejecución de sanciones no son susceptibles de ser demandados ante la jurisdicción, tal y como se expuso en la sentencia del cinco (5) de junio de dos mil catorce (2014), Consejera Ponente BERTHA LUCIA RAMIREZ DE PÁEZ dentro del radicado No. 11001-03-25-000-2011-00015-00(0044-11), donde se indicó:

“ACTOS DE EJECUCIÓN DE LA SANCIÓN DISCIPLINARIA – No son susceptibles de control jurisdiccional Sobre el punto la Sala reitera que los actos de ejecución de la sanción disciplinaria no son susceptibles de control jurisdiccional, pues solamente lo son aquellas decisiones administrativas que tienen como causa un procedimiento de la misma naturaleza y los denominados actos de trámite que impiden continuar el respectivo procedimiento y si tan solo las decisiones referidas pueden demandarse ante

la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ello significa que los actos de ejecución de los pronunciamientos administrativos, o judiciales, están excluidos del aludido control, en la medida en que no contienen decisión definitiva de ninguna índole, toda vez que se profieren con el propósito de materializar o hacer efectivas las respectivas decisiones”

Conforme a lo transcrito, la Sala no tendrá en cuenta la pretensión de declaratoria de nulidad de la Resolución No. 03692 del 11 de septiembre de 2014 y rechazará la misma.

Por lo demás, teniendo en cuenta que oportunamente la apoderada de la parte actora corrigió los errores que provocaron la inadmisión de la demanda, y que en tal virtud la demanda y sus anexos cumplen con los requisitos formales señalados en la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”—en adelante C.P.A.C.A.- se admitirá la demanda en la forma que se señala a continuación.

Conforme a lo anterior, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

#### **RESUELVE:**

1. **RECHÁZASE** la demanda, en cuanto a la pretensión de declaratoria de nulidad de la Resolución No. 03692 del 11 de septiembre de 2014, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
2. **ADMÍTASE** la demanda que en ejercicio del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 C.P.A.C.A. se impetrará en representación del Señor **EDWIN GIOVANI HERNÁNDEZ GARCÍA** en contra de la **NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL**.

La demanda de la referencia tiene como finalidad la declaratoria de nulidad de los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos el 30 de mayo de 2014 y el 27 de agosto de 2014 por el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Cúcuta y el Inspector Delegado Región Cinco de Policía respectivamente, por medio de los cuales se decidió sancionar disciplinariamente al patrullero EDWIN GIOVANI HERNÁNDEZ GARCÍA con SUSPENSIÓN E INHABILIDAD ESPECIAL DE SEIS (6) MESES, SIN DERECHO A REMUNERACIÓN.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 171 numeral 1 del CPACA, **NOTIFÍQUESE** por estado a la parte actora la presente providencia, notificación que deberá surtirse de igual manera a la dirección de correo



electrónico otorgada por la parte demandante, atendiendo la forma dispuesta en el artículo 205 del CPACA.

4. Téngase como parte demanda a la **NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL**, entidad que en los términos del artículo 159 de la Ley 1437 de 2011 C.P.A.C.A. tiene capacidad para comparecer al proceso, siendo representada por el Ministro de Defensa y/o por el Secretario General de la Policía Nacional de acuerdo con la delegación concedida para tal fin.
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 171 numeral 1 del CPACA, **NOTIFÍQUESE** personalmente la admisión de la demanda al correo para notificaciones judiciales que disponga la **NACIÓN- MINISTERIO DE DEFENSA- POLICÍA NACIONAL**, en los términos del artículo 199 de la Ley 1437 de 2011 –modificado por el artículo 612 del Código General del Proceso.
6. **PÓNGASE** de presente a la entidad accionada, la obligatoriedad de dar cumplimiento a lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 175 del CPACA, so pena de la consecuencia jurídica allí establecida.
7. De conformidad con lo establecido en el artículo 171 numeral 2 del CPACA, **NOTIFÍQUESE** personalmente la admisión de la demanda al MINISTERIO PÚBLICO, en los términos del artículo 199 del CPACA modificado por el artículo 612 del CGP.
8. De conformidad con lo señalado en el artículo 612 inciso sexto del CGP que modificó el artículo 199 del CPACA, **NOTIFÍQUESE** personalmente la admisión de la demanda a la AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, en la forma establecida en la citada norma y a la dirección de buzón electrónico que dicha entidad ha proporcionado para ello.
9. En los términos y para los efectos contemplados en el artículo 172 de CPACA, **CÓRRASE TRASLADO DE LA DEMANDA** a la ENTIDAD DEMANDADA, al MINISTERIO PÚBLICO y a la AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.
10. Conforme al artículo 171 numeral 4 del CPACA., fíjese la suma de sesenta mil pesos (\$60.000.00), como **GASTOS ORDINARIOS DEL PROCESO** que deberán ser consignados por la parte actora en la cuenta que al efecto tiene el Tribunal en el Banco Agrario de la ciudad, para lo cual se señala un término de diez (10) días contados a partir de la notificación del presente auto; con la prevención de lo señalado en el artículo 178 ibídem.

**CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,**

(Esta providencia fue aprobada y discutida en Sala de Decisión N° 1 del 16 de diciembre de 2015)

  
**EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI.**  
Magistrado.

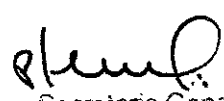
  
**MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
Magistrada.

  
**CARLOS MARIO PEÑA DÍAZ**  
Magistrado



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA SECCIONAL

Por anotación en ESTADO, notifico a las  
partes la providencia anterior, a las 8:00 a.m.  
hoy 18 DEC 2015

  
Secretario General



## TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

Magistrado Sustanciador **CARLOS MARIO PEÑA DÍAZ**

San José de Cúcuta, dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015)

**Ref:** 54-001-23-33-000-2015-00502-00  
**Actor:** Jesús David Izaquita Rodríguez como agente oficioso de Alejandro Enrique Izaquita Jácome  
**Demandado:** Dirección de Sanidad de la Policía Nacional - Jefatura Área de Sanidad del Departamento de Policía de Norte de Santander – Comandante de la Escuela CENOP de Chicoral San Luis Tolima – vereda La Laguna  
**Acción:** Tutela

Por haberse presentado oportunamente, **CONCÉDASE** la impugnación interpuesta por el señor Jesús David Izaquita Rodríguez, el día 15 de diciembre de 2015 (ver folio 116), en contra de la sentencia de tutela proferida por este Tribunal, el día 10 de diciembre de 2015, dentro del proceso de la referencia.

En consecuencia, por Secretaría, remítase el expediente al Honorable Consejo de Estado, previas las anotaciones secretariales de rigor.

Comuníquese la presente decisión a las partes por el medio más expedito.

### COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

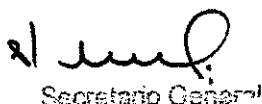


**CARLOS MARIO PEÑA DÍAZ**  
Magistrado



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA SECRETARIAL

Por anotación en ESTADO, notifico a las partes la providencia anterior, a las 8:00 a.m. hoy 16 DEC 2015



Secretario General



## **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**

San José de Cúcuta, diciembre dieciséis (16) de dos mil quince (2015)

**Magistrado sustanciador. Dr. Edgar Enrique Bernal Jáuregui**

**RADICADO:** 54-001-23-33-000-2015-00505-00  
**DEMANDANTE:** Hernán Velandia Arévalo  
**DEMANDADO:** Oscar Andrés Pérez González  
**MEDIO DE CONTROL:** Nulidad Electoral

En ejercicio del medio de control contemplado en el artículo 139 del CPACA, el ciudadano HERNÁN VELANDIA ARÉVALO, por intermedio de apoderado judicial, solicita se declare la nulidad del ACTA DE ESCRUTINIO MUNICIPAL DE LA COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BUCARASICA NORTE DE SANTANDER, el día 25 de octubre de 2015, en lo que tiene que ver con la declaratoria de elección del Concejal de ese municipio OSCAR ANDRÉS PÉREZ GONZÁLEZ para el periodo 2016 – 2019. Así mismo, solicita se declare la nulidad del formulario E- 26 donde se consignó la elección del señor OSCAR ANDRÉS PÉREZ GONZÁLEZ para el periodo 2016-2019; Y se declare la nulidad de la credencial expedida como Concejal al señor OSCAR ANDRÉS PÉREZ GONZÁLEZ.

Como medida cautelar, solicita la SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos jurídicos de los actos demandados, de conformidad con los artículos 229 a 241 del CCA, por considerar que los actos demandados violan flagrante y ostensiblemente el artículo 19 de la Ley 53 de 1990, por la cual se modifican algunos artículos de los Códigos de Régimen Departamental y Municipal; Los Decretos - leyes números 1222 y 1333 de 1986; la Ley 78 de 1986 y el Decreto - ley número 77 de 1987, según el cual:

Artículo 19. El artículo 87 del Código de Régimen Municipal (Decreto – Ley número 1333 de 1986, quedará así:

Los concejales principales y suplentes, no podrán ser nombrados empleados oficiales del respectivo municipio, a menos que fuese en los cargos de alcalde, por designación o nombramiento. En tal caso se producirá pérdida automática de su investidura a partir de la fecha de su posesión.

El cónyuge, compañero o compañera permanente, ni los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil del alcalde, de los concejales principales o suplentes, del Contralor, del Personero, del Secretario del Concejo, de los Auditores o Revisores, no podrán ser nombrados ni elegidos para cargo alguno en ninguna dependencia del respectivo municipio, ni contratar con el mismo, dentro del periodo para el cual fueron elegidos. No se dará posesión a quien fuere nombrado o elegido violando este artículo, previa comprobación”.

El concepto de violación de la norma para efecto de la suspensión provisional, se hace consistir, en que el señor VÍCTOR JULIO RANGEL GONZÁLEZ fue electo ALCALDE MUNICIPAL DE BUCARASICA para el periodo 2012 – 2015 por el partido conservador colombiano y actualmente desempeña ese cargo.

Que, el señor OSCAR ANDRÉS PÉREZ GONZÁLEZ, fue declarado electo como CONCEJAL del MUNICIPIO DE BUCARASICA, en los Comicios Electorales del 25 de octubre de 2015 a nombre del partido Conservador Colombiano de conformidad con el Acta de Escrutinio Municipal de fecha 26 de Octubre de 2015.

Que a su vez, el señor OSCAR ANDRÉS PÉREZ GONZÁLEZ es primo hermano del actual alcalde de Bucarasica, VÍCTOR JULIO RANGEL GONZÁLEZ, de conformidad con los registros civiles en donde consta que VÍCTOR JULIO RANGEL GONZÁLEZ es hijo legítimo de ROSA AMELIA GONZÁLEZ BOHADA, y que OSCAR ANDRÉS PÉREZ GONZÁLEZ, es hijo legítimo de ELOINA GONZÁLEZ BOHADA, siendo las dos hermanas entre sí, existiendo por tanto parentesco de cuarto grado de consanguinidad entre ellos, lo que implica que el señor OSCAR ANDRÉS PÉREZ GONZÁLEZ tiene una inhabilidad para ser Concejal de Bucarasica (Norte de Santander), por el periodo 2016-2019, al tenor de lo establecido por el artículo 19 de la Ley 53 de 1990.

Aporta como pruebas para efectos de la solicitud de suspensión provisional, el acta de escrutinio municipal de Bucarasica – Norte de Santander; el formulario E-26; Certificación de población emitida por el Dane; Formularios de inscripción de candidatos al Concejo de Bucarasica para el periodo 2016-2019; documento de elección E- 26 de Víctor Julio Rangel González como alcalde de Bucarasica periodo 2012- 2015; Registros Civiles de Nacimiento de Víctor Julio Rangel González y Oscar Andrés Pérez González. Para resolver se,

#### CONSIDERA:

De conformidad con el artículo 231 CPACA la medida cautelar de suspensión de los efectos de un acto administrativo procede, de conformidad con las siguientes reglas:

- Por la violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, **cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.**

- 62
- Además se prescribe que si se pretende además de la declaratoria de nulidad, el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios **deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.**

En el sub lite, se pretende se acceda a la suspensión provisional del acto que declaró la elección como Concejal del Municipio de Bucarasica al señor OSCAR ANDRÉS PÉREZ GONZÁLEZ, por considerar que se encuentra incurso en causal de inhabilidad, al incurrir en la prohibición establecida en el artículo 19 de la Ley 53 de 1993, por ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad al ser primo hermano del señor VÍCTOR JULIO RANGEL GONZÁLEZ, actual Alcalde del Municipio de Bucarasica.

De otra parte, el artículo 275 del CPACA, contempla como causales de anulación electoral, entre otras, cuando

5. "Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad"

Lo anterior comporta que la causal de nulidad del acto demandado y de suspensión provisional de sus efectos no se busque directamente en la confrontación del acto de elección demandado y la normativa alegada sino en los medios probatorios que reposan en el expediente, para efectos de dilucidar si efectivamente hay elementos que lleven a considerar que el demandado se encontraba incurso en la inhabilidad planteada.

Para la Sala, a efectos de determinar si en efecto, se configura la prohibición que se invoca como motivo de inhabilidad, requiere encontrar probado de manera idónea dentro de las pruebas obrantes en el expediente, el parentesco que se dice existe entre el actual alcalde y el concejal electo cuya nulidad de elección se solicita en esta demanda, lo que a la fecha no se encuentra probado; pues si bien se allegaron los registros civiles de nacimiento de los señores OSCAR ANDRÉS PÉREZ GONZÁLEZ y VÍCTOR JULIO RANGEL GONZÁLEZ, donde se hace constar que son hijos de las señoras ELOÍNA GONZÁLEZ BOHADA y ROSA AMELIA GONZÁLEZ BOHADA, no existe la prueba idónea que acredite que las mencionadas señoras son hijas de una misma madre, y por ende, sus hijos ostenten el grado de primos hermanos.

En este orden de ideas, y ante la ausencia de prueba idónea que permita establecer en este momento procesal, el parentesco existente y del cual se pretende endilgar la existencia de la causal de inhabilidad que aquí se depreca, no es procedente acceder a decretar la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados.

De otra parte, conforme a lo previsto en el artículo 169 CPACA se rechazará la pretensión destinada a obtener la nulidad del Acta General de Escrutinio del 25 de octubre de 2015 por no ser objeto de control judicial, por cuanto con dicha Acta no se declara la elección del señor OSCAR ANDRÉS PÉREZ GONZÁLEZ como miembro del Concejo Municipal del Municipio de Bucarasica, para el periodo constitucional 2016-2020. En efecto, el Consejo de Estado ha señalado que para obtener la nulidad de una elección o de un registro electoral o acta de escrutinio deberá demandarse el acto por medio del cual la elección se declara y no los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecte a éstos<sup>1</sup>.

Finalmente y por reunirse los requisitos establecidos en el artículo 162 del CPACA, **se dispone:**

**PRIMERO: RECHÁCESE** conforme a lo previsto en el artículo 169 CPACA, la pretensión destinada a obtener la nulidad del Acta General de Escrutinio del 25 de octubre de 2015 por no ser objeto de control judicial.

**SEGUNDO: ADMÍTASE EN ÚNICA INSTANCIA<sup>2</sup>** la demanda de Nulidad Electoral instaurada por el señor HERNÁN VELANDIA ARÉVALO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13338072, por intermedio de apoderado judicial y en contra del señor OSCAR ANDRÉS PÉREZ GONZÁLEZ, destinada a la declaratoria de nulidad del acto de elección del señor OSCAR ANDRÉS PÉREZ GONZÁLEZ como miembro del Concejo Municipal del Municipio de Bucarasica, para el periodo constitucional 2016-2020, contenido en el formulario E-26 generado el 30 de octubre de 2015.

**TERCERO: NOTIFÍQUESE** personalmente esta providencia al señor OSCAR ANDRÉS PÉREZ GONZÁLEZ

Las notificación señalada se realizará de conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 1° del artículo 277 del CPACA.

De no ser posible la notificación personal al demandado dentro de los dos (2) días siguientes a la expedición del auto, se deberá notificar la providencia mediante aviso que se publicará por una vez en dos (2) periódicos de amplia circulación en

<sup>1</sup> CE. Caso de la Acción Electoral contra MARCO ANTONIO TORRES MARTINEZ, Radicación No. 11001-03-28-000-2006-00095-00(3938), Sentencia del 3 de julio de 2008. C.P. Mauricio Torres Cuervo.

<sup>2</sup> Ver artículo 289 numeral 9 del CPACA, y certificación del DANE sobre habitantes del Municipio de Bucarasica.

65  
el territorio de la respectiva circunscripción, lo anterior conforme a los literales b) y c) del artículo 277 del CPACA.

Así mismo, en caso de que el demandante no acredite las publicaciones en la prensa requeridas para surtir las notificaciones por aviso previstas en los literales anteriores, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación al Ministerio Público del auto que la ordena, se declarará terminado el proceso por abandono y se ordenará archivar el expediente –literal g) del numeral 1 del citado artículo 277.

**CUARTO: NOTIFÍQUESE** personalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil como autoridad que profiere el acto declaratorio de la elección del Concejal demandado, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales de la corporación y del ente territorial, de conformidad con el numeral 2° del artículo 277 del CPACA.

**QUINTO: NOTIFÍQUESE** personalmente al señor Agente del Ministerio Público, conforme al numeral 3° del artículo 277 del CPACA.

**SEXTO: NOTIFÍQUESE** por estado al demandante, tal como lo dispone el numeral 4° del artículo 277 del CPACA.

**SÉPTIMO: INFÓRMESE** a la comunidad la existencia de este proceso a través del sitio web de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, o en su defecto a través de otros mecanismos eficaces de comunicación, de conformidad con el numeral 5° del artículo 277 del CPACA.

**OCTAVO:** De conformidad con lo establecido en el artículo 279 del CPACA, la parte demandada tendrá un término de quince (15) días siguientes al día de la notificación personal del presente auto al demandado o al día de la publicación del aviso, según el caso, para contestar la demanda.

**NOVENO: SOLICITAR** al demandante, que dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de la presente providencia, allegue copia magnética de la demanda y sus anexos para la notificación de la demanda. Así mismo, para que suministre la dirección electrónica para recibir notificaciones de conformidad con los artículos, 199, 201 y 205 del CPACA.

**DECIMO: NIÉGUESE** la Medida Cautelar solicitada por la parte demandante, conforme a los argumentos expuestos en la presente providencia.



**UNDÉCIMO:** Reconózcase personería al doctor CARLOS LUIS DÁVILA ROSAS, para que actúe como apoderado de la parte actora, en los términos y para los efectos del memorial podería él conferido y que obran en autos<sup>3</sup>

**CÓPIESE NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

(Esta providencia fue aprobada y discutida en Sala de Decisión Oral N° 1 del 16 de diciembre de 2015)

  
**EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI**  
Magistrado

  
**MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
Magistrada

  
**CARLOS MARIO PEÑA DÍAZ**  
Magistrado

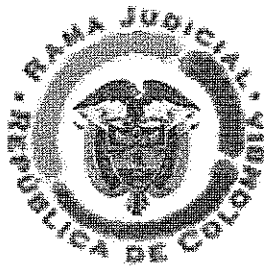


**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER**  
CONSTANCIA SECRETARIAL

Por anotación en ESTADO, notifico a las partes la providencia anterior, a las 8:00 a.m. hoy 18 DEC 2015

  
Secretario General

<sup>3</sup> Ver folio 18



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**

**Magistrado Sustanciador CARLOS MARIO PEÑA DÍAZ**

San José de Cúcuta, dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015)

Ref:      Radicado                : 54-001-23-33-000-2015-00509-00  
         Acción                 : Nulidad Electoral  
         Actor                  : Jhon Dany García Hernández  
         Contra                 : José Ignacio Rangel Andrade

De conformidad con el informe secretarial que antecede y teniendo en cuenta la certificación del DANE sobre la población del Municipio de Los Patios (fl. 60), esta Sala admitirá en Primera Instancia la demanda de nulidad electoral presentada por el señor Jhon Dany García Hernández, con el objeto que se declare la nulidad del acto de elección del señor José Ignacio Rangel Andrade como miembro del Concejo Municipal del Municipio de Los Patios, para el periodo constitucional 2016-2020, contenido en el formulario E-26 generado el 30 de octubre de 2015.

Igualmente, conforme a lo previsto en el artículo 169 CPACA se rechazará la pretensión destinada a obtener la nulidad del Acta General de Escrutinio del 25 de octubre de 2015 por no ser objeto de control judicial, por cuanto con dicha Acta no se declara la elección del señor José Ignacio Rangel Andrade como miembro del Concejo Municipal del Municipio de Los Patios, para el periodo constitucional 2016-2020. En efecto, el Consejo de Estado ha señalado que para obtener la nulidad de una elección o de un registro electoral o acta de escrutinio deberá demandarse el acto por medio del cual la elección se declara y no los cómputos o escrutinios intermedios, aunque el vicio de nulidad afecte a éstos<sup>1</sup>.

Por otro lado, se observa que la parte demandante solicita la suspensión provisional de los efectos del formulario E-26 declaratorio de la elección del señor José Ignacio Rangel Andrade como miembro del Concejo Municipal del

Municipio de Los Patios para el periodo constitucional 2016-2019. La solicitud de Suspensión Provisional la efectúa en el mismo texto del escrito de demanda y se fundamenta en las normas violadas y el concepto de violación de la misma.

De esta manera, se aprecia que la Suspensión Provisional solicitada se fundamenta en el artículo 43 de la Ley 617 de 2000 que prescribe como inhabilidad en su numeral 3 para inscribirse y ser elegido como Concejal Municipal lo siguiente:

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o distrital o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio o distrito. Así mismo, quien dentro del año anterior haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social en el régimen subsidiado en el respectivo municipio o distrito.

Frente a dicha inhabilidad, señala la parte demandante que el demandado prestó sus servicios profesionales remunerados como Auxiliar Administrativo, recibiendo posteriormente los pagos que fueron hechos con cargo a presupuestos oficiales. Se indica que igualmente ejerció como contratista realizando informes a la oficina de control interno de la Universidad Francisco de Paula Santander dentro de los 12 meses anteriores a las elecciones.

Antes de proceder a resolver la Medida Cautelar solicitada, es menester señalar que la regulación legal de las Medidas Cautelares susceptibles de ser emitidas por parte de los jueces administrativos viene regulada en la Ley 1437 de 2011 —en adelante CPACA— en los artículos 229 al 241, observándose en primer lugar que de conformidad con el artículo 229 CPACA el Juez o Magistrado podrá en todos los procesos declarativos decretar las medidas cautelares que se consideren necesarias para proteger y garantizar provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia.

---

<sup>1</sup> CE. *Caso de la Acción Electoral contra MARCO ANTONIO TORRES MARTINEZ*, Radicación No. 11001-03-28-000-2006-00095-00(3938), Sentencia del 3 de julio de 2008. C.P. Mauricio Torres Cuervo.

Por su parte, el artículo 230 CPACA preceptúa que las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda, por lo que el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar entre otras medidas la suspensión de un procedimiento o actuación administrativa, sólo en los casos en los que no exista otra posibilidad de conjurar o superar la situación que dé lugar a su adopción o suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.

Se hace necesario también resaltar que el artículo 231 CPACA trae unas reglas que el Juez o Magistrado debe seguir al momento de proceder al estudio y análisis de la solicitud de medida cautelar y eventualmente decretarla. En este sentido, se observa que el CPACA trae unas reglas específicas o especiales para decretar como medida cautelar la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos –medida cautelar históricamente decretada en los procesos ventilados en la jurisdicción administrativa- y otras reglas que se aplican en los demás casos, entendiéndose que se aplican cuándo se solicitan medidas cautelares diferentes a la suspensión provisional de los efectos del acto y que enunciativamente pero no taxativamente vienen relacionadas en el artículo 230 del CPACA, como lo es la suspensión de un procedimiento o actuación administrativa, impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer; ordenar la adopción de una decisión administrativa; etc.

En este sentido se ha pronunciado el Consejo de Estado<sup>2</sup>:

[...] la Sala advierte que de conformidad con el artículo 229 del CPACA, en todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, a petición de parte debidamente sustentada, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar *«las medidas que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia»*. Dentro de las medidas cautelares que puede decretar el Ponente, el artículo 230 numeral

<sup>2</sup> CE. Caso del Medio de Control de Nulidad contra el MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, Radicación No. 11001-03-26-000-2014-00054-00(21025), Auto del 28 de mayo de 2015. C.P. MARTHA TERESA BRICEÑO DE VALENCIA.

segundo del CPACA prevé, la de “[s]uspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual, como ocurrió en el caso en estudio. Por su parte, el artículo 231 del CPACA establece los requisitos que deben acreditarse para la procedencia de la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo y los que deben cumplirse para que proceda cualquiera otra de las medidas cautelares posibles [...] Así pues, unos son los requisitos para que pueda decretarse la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo, de carácter general o particular, y otros, para que sean procedentes las medidas cautelares distintas a dicha suspensión. Negrillas y Subrayado por la Sala.

Así se encuentra que de conformidad con el artículo 231 CPACA la medida cautelar de suspensión de los efectos de un acto administrativo procede, de conformidad con las siguientes reglas:

- Por la violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.
- Además se prescribe que si se pretende además de la declaratoria de nulidad, el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

Sobre las reglas previstas en el CPACA para efectos de decretar una medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos<sup>3</sup>:

“La nueva norma precisa entonces a partir de que haya petición expresa al respecto que: 1º) la procedencia de la suspensión provisional de los efectos de un acto que se acusa de nulidad puede acontecer si la

<sup>3</sup>Consejo de Estado, Sección Quinta, septiembre 13 del 2012, M.P Susana Buitrago Valencia Radicación número: 11001-03-28-000-2012-00042-00, Actor: Johan Steed Ortiz Fernández, Demandado: Representantes De Los Egresados Ante El Consejo Superior De La Universidad Sur colombiana.

violación de las disposiciones invocadas, surge, es decir, aparece presente, desde esta instancia procesal - cuando el proceso apenas comienza-, como conclusión del: i) análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas, o, ii) del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. 2º) Además, señala que esta medida cautelar se debe solicitar, ya con fundamento en el mismo concepto de violación de la demanda, o ya en lo que el demandante sustente al respecto en escrito separado.

Entonces, lo que en el nuevo Código representa variación significativa en la regulación de esta figura jurídico-procesal de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo acusado, con relación al estatuto anterior, radica en que ahora, la norma da apertura y autoriza al juez administrativo para que, a fin de que desde este momento procesal obtenga la percepción de que hay la violación normativa alegada, pueda: 1º) realizar análisis entre el acto y las normas invocadas como transgredidas, y 2º) que también pueda estudiar las pruebas allegadas con la solicitud.

Ahora bien, según la Real Academia de la Lengua Española el término "surgir" - (del latín surgere)- significa aparecer, manifestarse, brotar.<sup>4</sup>

En este punto esencial es donde radica la innovación de la regulación en el CPACA de esta institución de la suspensión provisional, pues la Sala recuerda que en el anterior CCA -Decreto 01 de 1984-, artículo 152, la procedencia de esta medida excepcional solicitada y sustentada de modo expreso en la demanda o en escrito separado, estaba sujeta o dependía de que la oposición o la contradicción del acto con las disposiciones invocadas como fundamento de la suspensión provisional fuera manifiesta, apreciada por confrontación directa con el acto o con documentos públicos aducidos con la solicitud.

De las expresiones "manifiesta" y "confrontación directa" contenidas en el artículo 152 del Código Contencioso Administrativo anterior, tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia dedujeron que la procedencia de esta figura excluía que el operador judicial pudiera incursionar en análisis o estudio, pues la transgresión por el acto de las normas en que debería fundarse, alegadas como sustento de la

<sup>4</sup> Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima Segunda Edición, consultado en <http://lema.rae.es/drae/?val=surja>

procedencia de la suspensión, debía aparecer "prima facie", esto es, sin implicar estudio ni esfuerzo analítico alguno.

Ahora bien, no obstante que la nueva regulación como ya se dijo permite que el juez previo a pronunciarse sobre la suspensión provisional lleve a cabo análisis de la sustentación de la medida y estudie pruebas, ocurre que ante el perentorio señalamiento del 2° inciso del artículo 229 del CPACA (Capítulo XI Medidas Cautelares- procedencia), conforme al cual: "La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento", es preciso entonces que el juez sea muy cauteloso y guarde moderación a fin que el decreto de esta medida cautelar no signifique tomar partido definitivo en el juzgamiento del acto ni prive a la autoridad pública que lo produjo o al demandado (en el caso el elegido o el nombrado cuya designación se acusa), de que ejerzan su derecho de defensa y que para la decisión final se consideren sus argumentos y valoren sus medios de prueba"

Una vez efectuadas estas precisiones preliminares por medio de los linderos normativos y jurisprudenciales aplicables al decreto de la Medida Cautelar de Suspensión Provisional de los Efectos del Acto Administrativo al interior de los procesos declarativos que conoce la jurisdicción contencioso administrativa, se procederá a realizar el análisis de la Medida Cautelar solicitada por la parte demandante. Para este propósito se desarrollará el análisis de la siguiente manera: (i) El análisis del material probatorio y (ii) La verificación de los requisitos para el decreto de la medida cautelar.

**(i) El análisis del material probatorio:** Lo primero que se debe resaltar en este punto, es que la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto de elección demandado, se fundamenta en la causal de inhabilidad en la que supuestamente estaría incurrido el señor José Ignacio Rangel Andrade al haber contratado con la Universidad Francisco de Paula Santander dentro de los 12 meses anteriores a su elección como Concejal del Municipio de Los Patios para el periodo 2016-2020.

Dicha causal de inhabilidad se encuentra prevista como una causal de anulación electoral subjetiva en el numeral 5 del artículo 275 CPACA que reza:

“Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incurso en causales de inhabilidad”

Lo anterior comporta que la causal de nulidad del acto demandado y de suspensión provisional de sus efectos no se busque directamente en la confrontación del acto de elección demandado y la normativa alegada sino en los medios probatorios que reposan en el expediente, para efectos de dilucidar si efectivamente hay elementos que lleven a considerar que el demandado se encontraba incurso en la inhabilidad planteada.

Así, se enunciarán los elementos probatorios que reposan al respecto en el expediente:

Hechos Probados	Medios Probatorios
El Señor José Ignacio Rangel Andrade, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.093.751.175 fue elegido como Concejal del Municipio de Los Patios para el periodo constitucional 2016-2019.	Copia del Formulario E-26 generado el 30 de octubre de 2015.  Folios 15-26 del expediente.
El Señor José Ignacio Rangel Andrade, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.093.751.175 prestó sus servicios a la Universidad Francisco de Paula Santander como Auxiliar Administrativo en el periodo de junio a diciembre de 2014, en cumplimiento de Contrato Individual de Trabajo a Término Fijo inferior a un año, con fecha de inicio 9 de julio de 2014 y fecha de terminación 23 de diciembre de 2014, sin que exista vinculación en el periodo enero a mayo de 2015.	Copia del Oficio 007651 y 007655 del 6 de noviembre de 2015 proferido por el señor Gabriel Peña Martínez, en su calidad de Jefe de División de Recursos Humanos de la Universidad Francisco de Paula Santander.  Folios 32-34 del expediente.
El Señor José Ignacio Rangel Andrade, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.093.751.175 celebró con la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta Contrato Individual de Trabajo a Término Fijo Inferior a un año No. 326 con inicio de labores el 9 de julio de 2014 y vencimiento a 23 de diciembre de 2014, con un salario mensual de \$616.000 pagadero por mes vencido, como Auxiliar Administrativo.  El Lugar del trabajo viene previsto en la cláusula octava del contrato que señala que el lugar de trabajo será en el domicilio principal y las partes podrán	Copia del Contrato Individual de Trabajo a Término Fijo Inferior a un año No. 326.  Folios 57-58 del expediente.



<p>convenir que el trabajo se preste en lugar distinto del inicialmente contratado, siempre que tales traslados no desmejoren las condiciones laborales o de remuneración del trabajador o impliquen perjuicios para él.</p>	
--	--

**(ii) La verificación de los requisitos para el decreto de la medida cautelar.**

En el presente caso es pertinente anotar que el H. Consejo de Estado<sup>5</sup>, en reiterada jurisprudencia, ha señalado que el régimen de incompatibilidades, inhabilidades y conflicto de interés, tiene como objetivo principal lograr la moralización, idoneidad, probidad e imparcialidad de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos. Los hechos que el Constituyente o el legislador tipifican como causales de violación a este régimen, son de distinta índole, algunos de carácter general, toda vez que, operan para toda clase de servidores públicos; mientras que otros, sólo se establecen para determinada entidad o rama del poder público, y a un tercer grupo es temporal y otro permanente.

Así mismo, el H. Consejo de Estado ha fijado el alcance de la inhabilidad que se predica, de la celebración de contratos que deban ejecutarse en el mismo municipio o distrito en donde se va a ejercer el cargo de elección popular, al señalar que:

“La intervención en la celebración de contratos implica la ejecución de conductas que revelen una participación personal y activa en actos previos a la celebración de un contrato o en la celebración o suscripción del mismo. Tratándose de inhabilidad de concejales se configura cuando el elegido, dentro del año anterior a los comicios, ha desplegado alguna actividad dentro de una operación contractual enderezada a la celebración de un contrato o suscrito el respectivo acuerdo de voluntades, por lo mismo, es plausible considerar que se trata de actividades desarrolladas una vez la entidad pública contratante ha manifestado a los particulares - contratistas, su deseo de contar con su colaboración, previo un acuerdo

<sup>5</sup> CE 1, 27 sep. 2007, e25000-23-15-000-2006-01754-01, M. Sanz Tobón. En [http://www.consejodeestado.gov.co/relatoria/año-salas-secciones/2007/sección primera/No. 313](http://www.consejodeestado.gov.co/relatoria/año-salas-secciones/2007/sección_primera/No.313).

de voluntades, para el cumplimiento de sus cometidos específicos y, finalmente, de los del Estado<sup>6</sup>.

Dentro de este contexto ha señalado que la inhabilidad consagra unos supuestos, a saber:

“La norma prevé una sola hipótesis de inhabilidad: la intervención en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o en el de terceros, siempre y cuando la ejecución o cumplimiento del contrato deba darse en la circunscripción del municipio o distrito en el cual se efectúe la respectiva elección y dentro del año anterior a ésta. Para que se configure esa causal de inhabilidad es necesario demostrar cinco supuestos: i) la elección, esto es, que el demandado ha sido elegido Concejal; ii) el objeto, es decir, que existe un contrato en cuya celebración el elegido hubiere intervenido, ya sea en interés propio o en interés de terceros; iii) la calidad del contratante, puesto que se debe probar que éste se celebró con entidades públicas de cualquier nivel; iv) el tiempo en que fue celebrado, es decir, que el contrato se haya celebrado dentro del año anterior a la elección; y v) el lugar, pues se exige que el contrato deba ejecutarse en el mismo municipio o distrito donde resultó electo el demandado<sup>7</sup>.”

Bajo esta perspectiva, atendiendo a los lineamientos marcados por la jurisprudencia del Consejo de estado, la Sala se ocupará de analizar si en el presente caso, se configuran los elementos necesarios para decretar la medida cautelar solicitada por el señor Jhon Dany García Hernández.

Atendiendo a lo anteriormente señalado, para la Sala es claro que en el presente caso no se encuentran comprobados todos los elementos necesarios para proceder a la Medida Cautelar solicitada por la parte demandante. Lo anterior es así, porque si bien se comprueba que el señor José Ignacio Rangel Andrade contrató con la Universidad Francisco de Paula Santander, ente universitario autónomo del orden departamental, por medio de un contrato Individual de Trabajo a Término Fijo Inferior a un año No. 326 (fls. 57-58) no se constata en esta etapa procesal que el mismo se haya celebrado dentro del año anterior a la elección, es decir para octubre de 2014 y mucho menos se

<sup>6</sup> CE 5, 18 feb. 2010, 50001-23-31-000-2007-01129-01, F. Jiménez Ochoa. En <http://www.consejodeestado.gov.co/relatoria/año-salas-secciones/2010/sección quinta/No. 79>.

<sup>7</sup> CE 5, 11 feb. 2005, e 25000-23-24-000-2003-01125-01(3499), D. Quiñonez Pinilla. En <http://www.consejodeestado.gov.co/relatoria/año-salas-secciones/2005/sección quinta/No. 138>.

cuenta en este momento procesal con material probatorio idóneo que indique siquiera sumariamente que el contrato celebrado con una entidad pública del orden departamental como lo es la Universidad Francisco de Paula Santander, se haya ejecutado en el Municipio para el cual fue elegido el señor José Ignacio Rangel Andrade como Concejal, que para el caso concreto es el Municipio de Los Patios.

Así las cosas, se negará la Suspensión Provisional solicitada por la parte demandante.

**En consecuencia, se dispone:**

**PRIMERO: RECHÁCESE** conforme a lo previsto en el artículo 169 CPACA, la pretensión destinada a obtener la nulidad del Acta General de Escrutinio del 25 de octubre de 2015 por no ser objeto de control judicial.

**SEGUNDO: ADMÍTASE** la demanda de Nulidad Electoral instaurada por el señor **Jhon Dany García Hernández**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.262.121 de Cúcuta, en contra del señor José Ignacio Rangel Andrade identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.093.751.175, destinada a la declaratoria del ato de elección del señor José Ignacio Rangel Andrade como miembro del Concejo Municipal del Municipio de Los Patios, para el periodo constitucional 2016-2020, contenido en el formulario E-26 generado el 30 de octubre de 2015.

**TERCERO: NOTIFÍQUESE** personalmente esta providencia al señor **José Ignacio Rangel Andrade** identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.093.751.175.

La notificación señalada se realizará de conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 1° del artículo 277 del CPACA.

De no ser posible la notificación personal al demandado dentro de los dos (2) días siguientes a la expedición del auto, se deberá notificar la providencia mediante aviso que se publicará por una vez en dos (2) periódicos de amplia circulación en el territorio de la respectiva circunscripción, lo anterior conforme a los literales b) y c) del artículo 277 del CPACA.

Así mismo, en caso de que el demandante no acredite las publicaciones en la prensa requeridas para surtir las notificaciones por aviso previstas en los literales anteriores, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación al Ministerio Público del auto que la ordena, se declarará terminado el proceso por abandono y se ordenará archivar el expediente –literal g) del numeral 1 del Citado artículo 277.

**CUARTO: NOTIFÍQUESE** personalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil como autoridad que profiere el acto declaratorio de la elección del Concejal demandado, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales de la corporación y del ente territorial, de conformidad con el numeral 2° del artículo 277 del CPACA.

**QUINTO: NOTIFÍQUESE** personalmente al señor Agente del Ministerio Público, conforme al numeral 3° del artículo 277 del CPACA.

**SEXTO: NOTIFÍQUESE** por estado al demandante, tal como lo dispone el numeral 4° del artículo 277 del CPACA.

**SÉPTIMO: INFÓRMESE** a la comunidad la existencia de este proceso a través del sitio web de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, o en su defecto a través de otros mecanismos eficaces de comunicación, de conformidad con el numeral 5° del artículo 277 del CPACA.

**OCTAVO:** De conformidad con lo establecido en el artículo 279 del CPACA, la parte demandada tendrá un término de quince (15) días siguientes al día de la notificación personal del presente auto al demandado o al día de la publicación del aviso, según el caso, para contestar la demanda.

**NOVENO: SOLICITAR** al demandante, que dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de la presente providencia, allegue copia magnética de la demanda y sus anexos para la notificación de la demanda. Así mismo, para que suministre la dirección electrónica para recibir notificaciones de conformidad con los artículos, 199, 201 y 205 del CPACA.

**DECIMO: NIÉGUESE** la Medida Cautelar solicitada por la parte demandante, conforme a los argumentos expuestos en la presente providencia.

**CÓPIESE NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

(Esta providencia fue aprobada y discutida en Sala de Decisión Oral N° 3 del  
16 de diciembre de 2015)

  
**CARLOS MARIO PEÑA DÍAZ**  
Magistrado

  
**EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI**  
Magistrado

  
**MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
Magistrada



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA SECRETARIAL

Por anotación en ESTADO, notifíco a las  
partes la providencia anterior, a los 8:00 a.m  
hoy 16 DEC 2015

  
Secretario General



483

## **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**

San José de Cúcuta, dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015)

Magistrado Ponente **EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI**

**RADICADO:** No. 54-001-23-33-000-2015-00510-00  
**ACCIONANTES:** José Neftalí Niño Serrano  
**DEMANDADO:** Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional  
**MEDIO DE CONTROL:** Nulidad y Restablecimiento

En el estudio de admisibilidad de la demanda, advierte la Sala que ha operado la caducidad en el presente medio de control, tal y como se analizará a continuación.

Los actos administrativos demandados corresponden a los fallos disciplinarios de primera y segunda instancia proferidos el 17 de marzo de 2015 y el 14 de mayo de 2015 por el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Policía Metropolitana de Cúcuta y el Inspector Delegado Región Cinco de Policía respectivamente, por medio de los cuales se decidió sancionar disciplinariamente al patrullero JOSÉ NEFTALÍ NIÑO SERRANO con DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL POR EL TÉRMINO DE DIEZ AÑOS.

En relación con ellos advierte la Sala, que no fueron demandados dentro del término establecido en el artículo 164 numeral 2 literal d) del CPACA, esto es, dentro de los cuatro meses siguientes a la notificación del acto administrativo según el caso, debido a que el fallo de segunda instancia, es decir, el que dejó en firme la sanción impartida al demandante fue notificada el 19 de mayo de 2015 en forma personal al apoderado judicial del patrullero accionante<sup>1</sup> día siguiente a partir de la cual empezó el cómputo de los 4 meses establecidos en el artículo 164 numeral 2 literal d) del CPACA, los cuales vencieron el día 20 de septiembre de 2015, día dominical por lo cual se trasladó al 21 de septiembre de 2015 que corresponde al día siguiente hábil, y como quiera que la solicitud de conciliación fue presentada el 28 de septiembre de 2015<sup>2</sup>, la cual se declaró fallida el 27 de noviembre hogaño<sup>3</sup>, radicándose la demanda el 03 de diciembre de 2015<sup>4</sup>, es evidente que se encuentra caducado el medio de control de la referencia, razones por las que deberá rechazarse la demanda en cumplimiento del artículo 169 numeral 1 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Al efecto, en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 13 de mayo de 2015, dentro del expediente 110010325000201200027 00 número interno 0131-2012, Consejera ponente SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, se expuso como debe contarse la caducidad en éste tipo de medio de control, al manifestar que:

<sup>1</sup> Folio 455

<sup>2</sup> Folios 60 al 61.

<sup>3</sup> Folio 59.

<sup>4</sup> Folio 58

Rad.: 54-00123-33-000-2015-00510-00

Actor: José Neftalí Niño Serrano

Rechaza demanda por caducidad.

"En efecto, si una vez dictado el acto administrativo sancionatorio definitivo<sup>5</sup>; el interesado fue notificado del mismo, es a partir del día siguiente al de la notificación que debe contarse el término caducidad, como bien lo ordena el artículo 136 del C.C.A., cuando prevé que los 4 meses se cuentan a partir de la notificación del acto.

Lo anterior porque es la decisión sancionatoria de única o de segunda instancia, la que resuelve de fondo la situación jurídica del disciplinado, cosa que no ocurre con el acto de ejecución, pues éste último tan solo tiene por objeto materializar la decisión que la autoridad que ejerce el control disciplinario interno previamente ha adoptado, y que ha quedado en firme.

De manera que conocida la decisión disciplinaria definitiva, el interesado debe acatar los términos procesales para acudir ante esta jurisdicción, los cuales, como ya se dijo, son de carácter perentorio, y comienzan a correr desde el día siguiente al de la notificación de aquella, independientemente de que en sede judicial se cuestione o no la legalidad del acto de ejecución".

Conforme a lo anterior, la Sala procederá a rechazar la demanda como se señalará en la parte resolutive de este proveído.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander,

### RESUELVE

**PRIMERO: RECHAZAR** por caducidad la demanda presentada por el señor **JOSÉ NEFTALÍ NIÑO SERRANO**, por intermedio de apoderado judicial, conforme a las razones expuestas.

**SEGUNDO:** Reconózcase personería al doctor **JAVIER ANDRÉS GÁLVIS ARTEAGA**, como apoderado de la parte actora, en los términos y para los efectos del memorial poder a él conferido y que obra en autos<sup>6</sup>.

**TERCERO:** En firme este proveído devuélvanse los anexos de la demanda sin necesidad de desglose y archívese el expediente.

### CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

(Esta providencia fue aprobada y discutida en Sala de Decisión, N° 1 del 16 de diciembre de 2015)

**EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI.**  
Magistrado.

**MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
Magistrada.

**CARLOS MARIO PEÑA DÍAZ**  
Magistrado

Por anotación en el expediente  
hoy 17 DEC 2015 a las 8:00 a.m.

<sup>5</sup> Sea porque contra él ya no caben recursos, o porque siendo estos procedentes ya se interpusieron

<sup>6</sup> Folio 1

Secretario General



## **TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**

San José de Cúcuta, diciembre dieciséis (16) de dos mil quince (2015)

**Magistrado Sustanciador. Dr. Edgar Enrique Bernal Jáuregui**

**RADICADO:** 54-001-23-33-000-2015-00515-00  
**DEMANDANTE:** Richard Salazar  
**DEMANDADO:** Diego Armando González Toloza  
**MEDIO DE CONTROL:** Nulidad Electoral

En ejercicio del medio de control contemplado en el artículo 139 del CPACA., el ciudadano RICHARD SALAZAR, actuando en nombre propio, solicita se declare la nulidad del acto administrativo del 30 de octubre de 2015, expedido por la Comisión Escrutadora Municipal de Los Patios, Norte de Santander, por medio del cual se declaró electo como Alcalde Municipal de Los Patios (Norte de Santander), al señor DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA, portador de la cédula de ciudadanía N° 88'245.955 de Los Patios para el periodo 2016-2019; Y se declare la nulidad de la credencial expedida a nombre de DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA, como Alcalde Municipal de Los Patios, Departamento Norte de Santander, para el periodo 2016 – 2019.

Como medida cautelar, en defensa de la soberanía popular y del interés público, solicita se suspenda la elección, conforme a los siguientes fundamentos:

Refiere que de conformidad con el artículo 231 numeral 3 del CPACA, si con la demanda se allegan documentos, informaciones o argumentaciones que permiten concluir mediante un juicio de ponderación que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar, configurándose en el caso de autos la anotada circunstancia, como quiera que razonablemente existe con el doble registro de nacimiento un riesgo inminente para la buena administración del Municipio de Los Patios de presentarse una decisión jurisdiccional de carácter penal que afecte el alcalde electo, por considerar que no existe una justificación probable y como tal, frente a ese riesgo, la administración municipal podría sufrir traumautismo en su buena administración.

Se indica que a los electores del Municipio de Los Patios, como depositarios de la soberanía popular, les asiste derecho dentro del marco de la democracia representativa, a que su alcalde como máximo representante, esté investido de la idoneidad frente a la ley, que minimice cualquier riesgo de declaratoria de nulidad,



sanción penal o disciplinaria que lo inhabilite para el ejercicio del cargo, con el consecuente perjuicio para los intereses de la entidad territorial.

Aduce que el derecho político como fundamental se expresa en la materialización de construir una organización política eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como lo refiere el artículo 2 sobre los fines esenciales del Estado, y como tal dicho valor constitucional prevalente se lesiona, queda en riesgo, cuando a quien se elige está incurso en un hecho punible que coloca en riesgo su posesión y continuidad en el cargo público más importante del municipio, solicitando por tanto el decreto de la medida cautelar para evitar el riesgo de lesionar el interés público.

Se aportan como pruebas dentro de la demanda, copia autentica del acto administrativo de fecha 30 de octubre de 2015 expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de Los Patios de Norte de Santander, en virtud de la cual se declara electo como Alcalde Municipal de Los Patios, Norte de Santander, al señor DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA, identificado con la cédula de ciudadanía 88'245.955 de Cúcuta.

Copia autentica del acta de escrutinio de Los Patios – Norte de Santander;

Fotocopia autentica del libro de registro civil de nacimiento Nro. 497, folio 531, tomo 1, donde se encuentra registrado el nacimiento de DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA, suscrito por Registrador Principal Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela.

Documento original del libro civil de nacimiento del señor DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA expedidos por la Notaría 3 de Cúcuta, con los números consecutivos de la Superintendencia de Notariado y Registro 8633502 y 12299891.

Copia del Registro Electoral Venezolano, donde aparece identificado con la cédula de ciudadanía número V14974964.

Copia de denuncia penal presentado ante la Fiscalía General de la Nación.

Copia autentica del acta de escrutinio general practicada por los delegados del Consejo Nacional Electoral sobre los votos emitidos en las mesas de votación de las elecciones de autoridades locales celebradas el domingo 25 de octubre de 2015, en la circunscripción electoral de Norte de Santander.

67

Para resolver se, **CONSIDERA:**

De conformidad con el artículo 231 CPACA la medida cautelar de suspensión de los efectos de un acto administrativo procede, de conformidad con las siguientes reglas:

- Por la violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, **cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.**
- Además se prescribe que si se pretende además de la declaratoria de nulidad, el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios **deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.**

En el sub lite, se pretende se acceda a la suspensión provisional del acto que declaró la elección como Alcalde del Municipio de Los Patios al señor DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA, por considerar que se encuentra incurso en causal de inhabilidad consagrada en la Ley 136 de 1994, artículo 95, numeral 1, según la cual:

**ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE.** <Artículo modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:

1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.

Así como la contemplada en el Numeral 7 de la Ley 136 de 1994, por presentar doble nacionalidad al haber nacido simultáneamente en la República Bolivariana de Venezuela y en la República de Colombia, hecho que se pretende probar con la copia fotostática del libro civil de nacimiento 497 folio 531 tomo 1 expedida por el Ministerio del poder Popular para las Relaciones interiores Justicia y Paz oficina de registro principal del Estado Táchira, debidamente legalizada y apostillada por la República Bolivariana de Venezuela, así como certificados de Registro de Nacimiento del señor DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA expedidos por la Notaria 3 de Cúcuta, consecutivos de la Superintendencia de Notariado y Registro 8633502 y 12299891.

De otra parte, el artículo 275 del CPACA, contempla como causales de anulación electoral, entre otras, cuando

5. "Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incurso en causales de inhabilidad"

Lo anterior comporta que la causal de nulidad del acto demandado y de suspensión provisional de sus efectos no se busque directamente en la confrontación del acto de elección demandado y la normativa alegada sino en los medios probatorios que reposan en el expediente, para efectos de dilucidar si efectivamente hay elementos que lleven a considerar que el demandado se encontraba incurso en la inhabilidad planteada.

Para la Sala, a efectos de determinar si en efecto, se configura la prohibición que se invoca como motivo de inhabilidad, requiere encontrar probado de manera idónea dentro de las pruebas obrantes en el expediente, que exista una condena penal con pena privativa de la libertad por la conducta punible que se le endilga.

La doble identidad que conllevaría una falsedad en documento público, y que por ende se dice inhabilitaría al alcalde electo para el periodo 2016 – 2019, a la fecha no ha sido declarada judicialmente por la autoridad competente en la materia, o por lo menos en el estudio de admisibilidad de la demanda no se advierte que repose dentro del expediente, hecho éste que es aceptado por la parte demandante, quien indica que se ha instaurado denuncia penal por esta conducta ante la Fiscalía General de la Nación, próximo a imputación de cargos; pues si bien se allegaron los registros civiles de nacimiento que dan cuenta que el ciudadano electo como alcalde fue registrado tanto en la República Bolivariana de Venezuela, como en la República de Colombia, no existe la prueba idónea que acredite que por dicha conducta se haya declarado la responsabilidad penal del ciudadano y por ende se configure a la fecha la inhabilidad que se invoca como causal de nulidad del acto de elección.

Ahora bien, respecto a la segunda causal de inhabilidad que se invoca, consagrada en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, y que se enunciaba como doble nacionalidad, debe precisar la Sala que la misma ya no se configura como causal de inhabilidad, teniendo en cuenta que la Ley 136 de 1994, fue modificada por la Ley 617 de 2000, cuyo tenor literal vigente corresponde al siguiente:

**ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE.** <Artículo modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el

63

siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:

1. Quien haya sido condenado en cualquier época por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o haya perdido la investidura de congresista o, a partir de la vigencia de la presente ley, la de diputado o concejal; o excluido del ejercicio de una profesión; o se encuentre en interdicción para el ejercicio de funciones públicas.

2. Quien dentro de los doce (12) meses anteriores a la fecha de la elección haya ejercido como empleado público, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, en el respectivo municipio, o quien como empleado público del orden nacional, departamental o municipal, haya intervenido como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o celebración de contratos, que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio.

3. Quien dentro del año anterior a la elección haya intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas del nivel municipal o en la celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel en interés propio o de terceros, siempre que los contratos deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio. Así mismo, quien dentro del año anterior a la elección, haya sido representante legal de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio.

4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el respectivo municipio.

5. Haber desempeñado el cargo de contralor o personero del respectivo municipio en un periodo de doce (12) meses antes de la fecha de la elección."

En este orden de ideas, y ante la ausencia de prueba idónea que permita establecer en este momento procesal, la conducta penal debidamente declarada por autoridad competente y respecto de la cual se pretende endilgar la existencia de la causal de inhabilidad consagrada en el numeral 1 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994 que aquí se deprecia, aunado a la modificación de la Ley 136 de 1994 en su artículo 95 por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, en el cual ya no consagra el numeral 7 de la doble nacionalidad, invocado como causal de inhabilidad, no es procedente acceder a decretar la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados.

Finalmente y por reunirse los requisitos establecidos en el artículo 162 del CPACA, **se dispone:**

**PRIMERO: ADMÍTASE EN PRIMERA INSTANCIA<sup>1</sup>**, la demanda de Nulidad Electoral instaurada por el señor Richard Salazar, identificado con la cédula de ciudadanía No. 13'492.223 de Cúcuta, y en contra del señor DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA, destinada a la declaratoria de nulidad del acto de elección del señor DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA como Alcalde Popular del Municipio de Los Patios, para el periodo constitucional 2016-2019, contenido en el formulario E-26 generado el 30 de octubre de 2015.

**SEGUNDO: NOTIFÍQUESE** personalmente esta providencia al señor DIEGO ARMANDO GONZÁLEZ TOLOZA.

La notificación señalada se realizará de conformidad con lo establecido en el literal a) del numeral 1° del artículo 277 del CPACA.

De no ser posible la notificación personal al demandado dentro de los dos (2) días siguientes a la expedición del auto, se deberá notificar la providencia mediante aviso que se publicará por una vez en dos (2) periódicos de amplia circulación en el territorio de la respectiva circunscripción, lo anterior conforme a los literales b) y c) del artículo 277 del CPACA.

Así mismo, en caso de que el demandante no acredite las publicaciones en la prensa requeridas para surtir las notificaciones por aviso previstas en los literales anteriores, dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación al Ministerio Público del auto que la ordena, se declarará terminado el proceso por abandono y se ordenará archivar el expediente –literal g) del numeral 1 del citado artículo 277.

**TERCERO: NOTIFÍQUESE** personalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil como autoridad que profiere el acto declaratorio de la elección del Alcalde demandado, mediante mensaje dirigido al buzón electrónico para notificaciones judiciales de la corporación y del ente territorial, de conformidad con el numeral 2° del artículo 277 del CPACA.

**CUARTO: NOTIFÍQUESE** personalmente al señor Agente del Ministerio Público, conforme al numeral 3° del artículo 277 del CPACA.

**QUINTO: NOTIFÍQUESE** por estado al demandante, tal como lo dispone el numeral 4° del artículo 277 del CPACA.

**SEXTO: INFÓRMESE** a la comunidad la existencia de este proceso a través del sitio web de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, o en su defecto a

<sup>1</sup> Ver artículo 152 numeral 8 y certificación del DANE obrante a folio 64.

69/

través de otros mecanismos eficaces de comunicación, de conformidad con el numeral 5° del artículo 277 del CPACA.

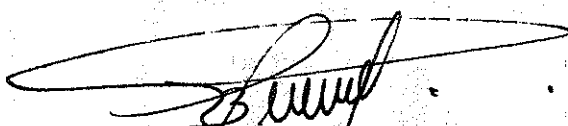
**SÉPTIMO:** De conformidad con lo establecido en el artículo 279 del CPACA, la parte demandada tendrá un término de quince (15) días siguientes al día de la notificación personal del presente auto al demandado o al día de la publicación del aviso, según el caso, para contestar la demanda.

**OCTAVO: SOLICITAR** al demandante, que dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de la presente providencia, suministre la dirección electrónica para recibir notificaciones de conformidad con los artículos 199, 201 y 205 del CPACA.

**NOVENO: NIÉGUESE** la Medida Cautelar solicitada por la parte demandante, conforme a los argumentos expuestos en la presente providencia.

**CÓPIESE NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

(Esta providencia fue aprobada y discutida en Sala de Decisión Oral N° 1 del 16 de diciembre de 2015)



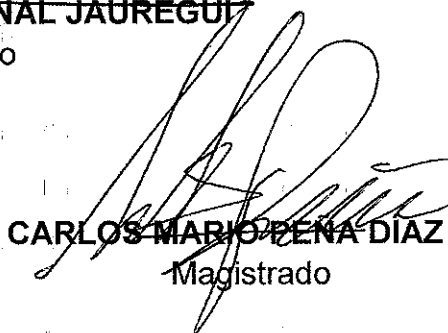
**EDGAR ENRIQUE BERNAL JAUREGUI**

Magistrado



**MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**

Magistrada



**CARLOS MARIO PEÑA DÍAZ**

Magistrado



**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA SECRETARIAL**

Por anotación en ESTADO, notifico a las  
partes la providencia anterior, a las 8:00 a.m.  
hoy 18 DEC 2015

  
Secretario General





**TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER**  
**Magistrada Sustanciadora: MARIBEL MENDOZA JIMÉNEZ**  
**San José de Cúcuta, quince (15) de diciembre del dos mil quince (2015)**

**Radicación número: 54-001-23-33-000-2015-00523-00**

**Actor: Néstor Beleño Carvajal**

**Demandado: César Omar Rojas Ayala**

**Medio de control: Nulidad Electoral**

De conformidad con el informe secretarial que antecede, procede el Despacho a **INADMITIR** la demanda presentada en virtud de lo previsto en el inciso 3º del artículo 276 del CPACA, por el señor NÉSTOR BELEÑO CARVAJAL a nombre propio, contra el señor CESAR OMAR ROJAS AYALA, por cuanto la misma no cumple con los siguientes requisitos para su admisión:

1. De conformidad con el artículo 139 del CPACA, los actos administrativos demandables ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el medio de control de nulidad electoral son los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden, los de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas, y las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección.

En el sub examine, advierte el Despacho que la parte demandante en la segunda pretensión de la demanda, solicitó la nulidad del acto de inscripción de la candidatura, los escrutinios de los votos contenidos en los formularios de Resultados de la comisión escrutadora correspondiente E-24 ALC, actos que no se encuentran enlistados como demandables en el artículo 139 del CPACA, por ser actos de trámite. En consecuencia, se debe corregir la demanda en tal sentido.





24

## TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE NORTE DE SANTANDER

San José de Cúcuta, dieciséis (16) de diciembre de dos mil quince (2015)

**Radicado N°:** 54-001-23-33-000-2015-00530-00  
**Demandante:** MARITZA ROJAS SAAVEDRA  
**Demandados:** BACHIR JUSSY MIREP CORONA  
**Medio de Control:** ELECTORAL

Al efectuar el análisis para proveer la admisión de la demanda de la referencia, encuentra el Despacho que la misma no cumple con todos los requisitos señalados los artículos 161 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 –CPACA–, razón por la cual se inadmitirá la misma y se ordenará su corrección conforme a lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 276 ibídem, en los siguientes aspectos:

Se requiere a la parte actora para que allegue copia del acto administrativo demandado, con la respectiva constancia de publicación, comunicación o notificación según sea el caso.

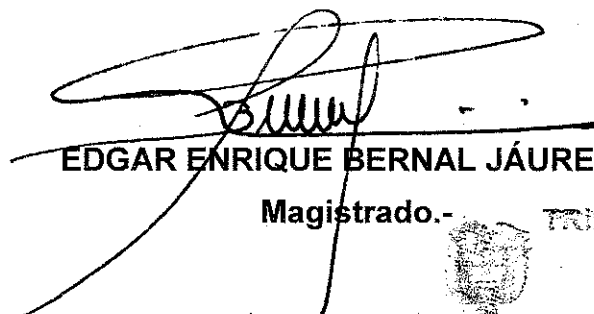
Por lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander

### RESUELVE:

**PRIMERO: INADMÍTASE** la demanda presentada por la Señora **MARITZA ROJAS SAAVEDRA**, contra el Señor **BACHIR JUSSY MIREP CORONA**, de conformidad con lo expuesto en la presente decisión.


**SEGUNDO: ORDÉNESE** corregir el defecto advertido, para lo cual se le concede un término de 3 días, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 276 del CPACA, so pena de rechazo de la demanda.

### NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

  
**EDGAR ENRIQUE BERNAL JÁUREGUI**  
Magistrado.-

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE  
NORTE DE SANTANDER  
CONSTANCIA SECRETARIAL

Por anotación en ESTADO, notifico a las partes la providencia anterior, a las 8:00 a.m.  
18 DEC 2015

  
Secretario General